

Doctor

PAULO CESAR RAMIRES DAVILA

Juez Cuarto Civil Municipal de Dosquebradas / Risaralda

j04cmunicipaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co

j04cmpaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA:	PROCESO VERBAL DE MENOR CUANTÍA
RADICADO:	2025-00171
DEMANDANTE:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. – COLDETRANS S.A.
DEMANDADOS:	JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA ALLIANZ SEGUROS S.A.

ASUNTO: CONTESTACION DE LA DEMANDA DEL PROCESO DE LA REFERENCIA.

NICOLAS RIOS GONZALEZ, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.088.325.095 expedida en Pereira, portador de la tarjeta profesional de Abogado No. 289.040 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado del señor **JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO**, identificado con la C.C. 10.225.828 expedida en Manizales, me dirijo a su despacho de manera respetuosa con el fin de dar contestación a la demanda que dio inicio al presente trámite judicial, en los siguientes términos:

1. OPORTUNIDAD

Me encuentro en término oportuno para contestar la demanda de conformidad a lo dispuesto en el artículo 391 del CGP.

2. FRENTE A LA NARRACIÓN DE HECHOS

PRIMERO: Es cierto

SEGUNDO: Es cierto

TERCERO: Es cierto

CUARTO: Es parcialmente cierto, dado que, si bien mi poderdante realizó llamamiento en garantía a ALLIANZ SEGUROS, por otra parte, la sociedad COLDETRANS S.A. realizó denuncia del pleito a COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, en dicha denuncia manifestó lo siguiente:

“2. El vehículo anteriormente citado para la fecha de los hechos Junio 12 de 2.013 transportaba carga según ORDEN DE CARGUE de la COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA.

3. Las planillas de cargue de la empresa COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES S.A. "COLDETRANS S.A.» para el mes de los hechos Junio de 2.013, demuestran que mi poderdante nunca cargo bajo su Responsabilidad el vehículo

de placa TTG200 para el municipio donde ocurrieron los lamentables hechos, Riosucio, Caldas.

4. Atendiendo lo dispuesto por las normas legales y cláusulas contractuales corresponde empresa COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA., pagar las sumas de dinero a las que eventualmente fuera condenada la COMPAÑÍA TRANSPORTES S.A. "COLDETRANS S.A." COLOMBIANA DE en este proceso, como solidario y civilmente responsable y es por ese interés que efectuamos la presente denuncia del pleito a la referida empresa."

QUINTO: No es un hecho, es una cita no textual de la parte resolutive de la Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales – Caldas.

SEXTO: No es un hecho es una cita textual de la parte considerativa de la de la Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales – Caldas.

SÉPTIMO: Es cierto.

OCTAVO: Es cierto.

NOVENO: Es cierto.

DÉCIMO: Son apreciaciones del apoderado de la parte demandante, que debieron ser alegadas y probadas dentro del proceso adelantado ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, apreciaciones que divide en varios subnumerales.

10.1. Es una apreciación frente a lo que el apoderado considera el objeto de esta litis.

10.2. Es una apreciación frente a lo que el apoderado considera el objeto de esta litis

Respecto a la "afiliación" del vehículo automotor a la sociedad COLDETRANS, fue una circunstancia que encontró probada el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas y cualquier circunstancia al respecto debió ser alegada en dicha instancia procesal, decisión que hace tránsito a cosa juzgada, de conformidad con la excepción que para tal efecto se planteará.

Aunado a lo anterior, en las conductas procesales realizadas por COLDETRANS S.A. en dicho proceso adelantado ante la jurisdicción contencioso administrativa se admitió dicha circunstancia, como bien lo refiere el Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia 126 del 26 de agosto de 2022 al referir lo siguiente:

"Ahora bien, aun cuando no reposa en el expediente el contrato de afiliación correspondiente, el Tribunal observa que el citado automotor se encontraba afiliado a la empresa COLDETRANS, pues dicho hecho fue aceptado expresamente como cierto por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y la citada compañía en las respectivas contestaciones de la demanda."

Es importante resaltar que al revisar el Acta de audiencia No. 093, de fecha 15 de mayo de 2017, del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales dentro del Rad. 201400566, se observa que en la fijación del litigio se estableció lo siguiente:

“A continuación, procede el Despacho a señalar los hechos más relevantes a fin de fijar el litigio:

(...)

4.) El vehículo involucrado en el accidente corresponde a un tracto – camión de placas TTG200 de servicio público, color naranja, y de propiedad del señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, siendo la empresa a la cual se encuentra registrado COLDETRANS S.A.

(...)

A continuación, se procede a interrogar a las partes si están de acuerdo con la fijación del litigio. Al respecto manifiestan que están conformes

Estando conformes las partes con la fijación del litigio, se procede a continuar con la diligencia”

De esta manera, se reitera que, cualquier circunstancia al respecto debió ser alegada en dicha instancia procesal, no es menor resaltar al honorable despacho judicial que COLDETRANS S.A. presentó acción de tutela en contra de dicha providencia judicial, y el Honorable Consejo de Estado declaró improcedente la misma. Por lo tanto, es aún más claro que cualquier circunstancia frente a la responsabilidad en el proceso hace tránsito a cosa juzgada, no encontrándose por el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativo yerro alguno.

10.3. Es una apreciación frente a lo que el apoderado considera el objeto de esta litis

Respecto a la responsabilidad de COLDETRANS o la COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTES LTDA, fue una circunstancia que encontró probada el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, y cualquier circunstancia al respecto debió ser alegada en dicha instancia procesal, decisión que hace tránsito a cosa juzgada, de conformidad con la excepción que para tal efecto se planteará.

UNDÉCIMO: No es cierto, el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas no dejó “en veremos” ningún aspecto relacionado con la responsabilidad solidaria de alguna de las partes del proceso de reparación directa, por el contrario, las responsabilidades quedaron claramente determinadas en la sentencia de segunda instancia, y los debates frente a la misma debieron surtir en dicho proceso, decisión que hace tránsito a cosa juzgada, de conformidad con la excepción que para tal efecto se planteará.

DUODÉCIMO: No nos consta, es un aspecto que debe probar la parte demandante.

DECIMOTERCERO: Es una apreciación del apoderado de la parte demandante que deviene de desconocer los efectos de cosa juzgada y mérito ejecutivo de la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, dado que cada una de las situaciones alegadas en este hecho fueron objeto de debate en dicho proceso, tal

como se formulará en la excepción de mérito pertinente, sin embargo, se procede a contestar cada uno de los subnumerales:

13.1. Dicha afirmación fue objeto de debate en el proceso de reparación directa, y decidido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, en donde concluyó que *"dicho hecho fue aceptado expresamente como cierto por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y la citada compañía en las respectivas contestaciones de la demanda."*, además, al momento de realizar la fijación del litigio no se objetó aspecto alguno frente a lo establecido respecto a que el vehículo de placas TTG200 se encontraba registrado en COLDETRANS S.A.

Es decir que lo que alega hoy la parte demandante debió haber sido discutido en el proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa, e incluso este argumento fue alegado en la tutela en contra de dicha providencia judicial, no encontrando el juez constitucional yerro alguno.

Aunado a lo anterior, la afirmación respecto a que nunca ha existido una afiliación o registro de parte de COLDETRANS S.A. con el camión de placas TTG200, ni verbal ni documentalmente, no es precisa, ni ajustada a la realidad fáctica y jurídica del caso.

Es importante señalar que cuando el señor JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO adquirió, junto con otras personas, el 100% de la composición accionaria de la sociedad COLDETRANS S.A., lo hizo con la finalidad de contar con una empresa de transporte debidamente constituida, que permitiera garantizar una carga más fija y estable para los vehículos de propiedad de algunos de los socios, y, también facilitar el transporte de bienes de interés para ellos.

Esta finalidad, que fue conocida, compartida y ejecutada por los accionistas, implicó la utilización efectiva de la infraestructura jurídica y operativa de COLDETRANS S.A., incluyendo la afiliación de vehículos a su operación de transporte, entre ellos el tractocamión identificado con las placas TTG200.

Debe recordarse que, en materia mercantil, los contratos se rigen por el principio de consensualidad, conforme lo establece el artículo 824 del Código de Comercio Colombiano, según el cual los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, salvo disposición legal en contrario. En ese sentido, la inexistencia de un documento escrito no invalida ni desvirtúa la existencia de un acuerdo de afiliación o vinculación entre la empresa y el vehículo mencionado, máxime cuando existen hechos, conductas y circunstancias objetivas que dan cuenta de una relación contractual tácita o verbal.

13.2. Es cierto, el vehículo es de propiedad de mi poderdante

13.3. Es una apreciación del demandante, debe recordarse que, frente a la responsabilidad, usufructo, afiliación, registro y/o vinculación del vehículo fueron

aspectos decididos por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, lo cual sin duda hace tránsito a cosa juzgada.

13.4. Es una apreciación subjetiva del demandante, se reitera lo ya mencionado en la contestación al hecho 13.1.

Aunado a lo anterior, es importante resaltar que, mi poderdante es accionista de COLDETRANS S.A. calidad que se predica de las sociedades de capital, no socio, dado que esta es una calidad que se deriva de las sociedades de persona. Además, no ha existido ninguna prohibición estatutaria que limite a los accionistas de la compañía a vincular los vehículos de los cuales son propietarios.

El demandante trata de incluir nuevos hechos y argumentos que debieron ser discutidos en el proceso de reparación directa, o incluso en la tutela ante providencia judicial, la cual no surgió favorable a las pretensiones de COLDETRANS S.A.

13.5. Es una apreciación del demandante, debe recordarse que, frente a la responsabilidad, usufructo, afiliación, registro y/o vinculación del vehículo fueron aspectos decididos por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, lo cual sin duda hace tránsito a cosa juzgada.

DECIMOCUARTO: Es una afirmación que se deduce de las pretensiones y la naturaleza de la demanda, la cual en todo caso es improcedente desde cualquier punto de vista, pues los hechos objeto de litis ya fueron discutidos y decididos en otro proceso judicial, sentencia que se encuentra debidamente ejecutoriada, haciendo tránsito a cosa juzgada. Sobre la cual incluso la demandante presentó acción de tutela, no encontrando el Honorable Consejo de Estado los yerros alegados.

DECIMOQUINTO: Es parcialmente cierto, pues efectivamente la empresa COLDETRANS S.A. alegó en el proceso de reparación directa lo afirmado por el apoderado de la parte demandante, sin embargo, como se ha mencionado a lo largo de la contestación de la demanda el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, concluyó que *"dicho hecho fue aceptado expresamente como cierto por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y la citada compañía en las respectivas contestaciones de la demanda."*, además, al momento de realizar la fijación del litigio no se objetó aspecto alguno frente a lo establecido respecto a que el vehículo de placas TTG200 se encontraba registrado en COLDETRANS S.A.

De esta manera, los fundamentos facticos y jurídicos que sustentas esta demanda ya fueron discutidos en el proceso contencioso administrativo en el cual se dictó sentencia, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada y hace tránsito a cosa juzgada.

Si la demandante considera que existió una indebida defensa de los intereses de la compañía debería entablar las acciones de responsabilidad contractual que correspondan en contra del profesional del derecho, o incluso en contra del representante legal de la época por un posible incumplimiento de sus deberes de diligencia como administrador en los términos de la Ley 222 de 1995, pero no puede

pretender reabrir un debate procesal que se cerró con la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.

DECIMOSEXTO: Es cierto.

3. FRENTE A LAS PRETENSIONES

En nombre de mi representado solicito al Despacho desestimar todas y cada una de las pretensiones de la demanda, a las cuales me opongo por improcedentes. Al no existir ningún tipo de fundamento factico ni jurídico para la prosperidad de estas. Maxime cuando estos aspectos ya fueron discutidos y decididos en otro proceso judicial.

En tal sentido, y tratándose de cada una de las pretensiones declarativas y de condena, me opongo a cada una de ellas.

4 EXCEPCIONES DE FONDO

4.1 COSA JUZGADA

En reiterada jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia ha establecido la fuerza que la ley atribuye a las sentencias judiciales de resolver definitivamente, entre las partes, la cuestión controvertida, en forma que ya no puede volver a suscitarse entre ellas porque es absolutamente nula cualquier decisión posterior que le sea contraria, en tal sentido ha manifestado que eso tiene por fin:

"(...) alcanzar certeza en el resultado de los litigios, definir concretamente las situaciones de derecho, hacer efectivas las decisiones jurisdiccionales y evitar que las controversias se reabran definitivamente con perjuicio de la seguridad jurídica de las personas y del orden social del Estado (...). Si la función jurisdiccional busca el fin (...) de dirimir en autoridad los conflictos que suscita la actividad de los particulares o de los funcionarios de la administración, es claro que aquel objeto no se alcanza sino mediante la desaparición de la materia contenciosa –el litigio– que es un fenómeno anormal dentro de la organización jurídica de la sociedad. De ahí que decida la cuestión conflictiva con la plenitud de las formalidades procedimentales y el ejercicio de los recursos establecidos por la ley, con el propósito de garantizar la mayor certeza en las determinaciones de los jueces, se reputa que la manifestación de voluntad de éstos en el ejercicio de la competencia que el derecho positivo del Estado le ha conferido es la verdad misma y como tal lleva en sí la fuerza legal necesaria para imponerse obligatoriamente (...)”¹.

¹ CSJ. SC. Sentencia de 30 de junio de 1980. En similar sentido: Sentencias de 5 de noviembre de 1969, 2 de marzo de 1976, 30 de junio de 1980, 29 de octubre de 1981, 24 de abril de 1984, 20 de agosto de 1985, 15 de junio de 2000, 14 de febrero de 2001, 12 de agosto de 2003, 19 de septiembre y 18 de diciembre de 2009, 16 de diciembre de 2010, 7 de noviembre de 2013, y 8 de mayo de 2014.

De esta manera, esto tiene por fin prolongar de manera indefinida los litigios que inicien las partes, como en este caso, que la demandante incluso acudió a la tutela contra providencia judicial, al respecto la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que:

“No puede provocarse de nuevo la competencia jurisdiccional pretendiendo un nuevo fallo porque ello equivaldría a prolongar indefinidamente la subsistencia de la cuestión litigiosa y a destruir el carácter de certeza que comporta el contenido de las providencias judiciales”².

Se ha establecido de forma reiterada en la doctrina y la jurisprudencia los tres elementos para determinar la existencia de la figura de cosa juzgada:

- Eadem res (objeto)
- Eadem causa petendi (causa)
- Eadem conditio personarum (partes),

De esta manera, se procederá a realizar explicación de cada uno de estos elementos y la identidad con el proceso de reparación directa adelantado en la jurisdicción contencioso administrativa:

Identidad de objeto de la demanda

La Corte Suprema de Justicia ha establecido que, el **objeto de la demanda** consiste en el bien corporal o incorporeal³ que se requiere, o sea en las prestaciones o declaraciones que se reclaman de la justicia⁴, es el objeto de la pretensión⁵. En el ámbito de la cosa juzgada, cuando la ley habla de identidad de objeto, indica que en el nuevo proceso se controvierta sobre el equivalente bien jurídico disputado en el litigio anterior⁶. Por consiguiente, y en relación con el *quid*, responde al interrogante de **sobre qué se litiga**⁷.

Al respecto el Dr. Hernán Fabio López Blanco en su libro Código General del Proceso Parte General establece frente a este requisito que:

“(...) el nuevo proceso verse sobre un mismo objeto (art. 303). Tal como lo dice con acierto la Corte ' "el objeto de la demanda consiste en las prestaciones o declaraciones que se reclaman a la justicia", que son precisa mente los puntos sobre los cuales versa la parte resolutive de la sentencia;

Devis? señala que el "objeto del proceso lo constituye el derecho reconocido, declarado o modificado por la sentencia, en relación con una cosa o varias cosas determinadas, o la relación jurídica declarada según el caso.

Ampliamente tratado por la doctrina debido a su importancia, el concepto de objeto del proceso resulta esencial entre otros muchos aspectos para precisar la existencia de la cosa juzgada; numerosas son las teorías que pretenden explicar cuál es la noción, y vívido ejemplo de ello son las posiciones de la Corte Suprema

² SC. CSJ. Sentencia de 30 de junio de 1980.

³ Las nociones de bienes “corporales” o “incorporales”, en materia de “objeto” de la demanda, fue incorporada, en el léxico de la Corte, mediante fallo de 24 de enero de 1983. Hoy es de frecuente utilización en la doctrina jurisprudencial, como puede verse en los fallos del 30 de octubre de 2002, de 12 de agosto de 2003, de 5 de julio de 2005, de 12 de junio de 2008, de 19 de septiembre de 2009; 16 de noviembre de 2010; y 7 de noviembre de 2013.

⁴ CSJ. SC. Sentencia de 9 de mayo de 1952.

⁵ CSJ. SC. Sentencia de 30 de octubre de 2002. Reiterada, entre muchas otras, en fallo de 7 de noviembre de 2013.

⁶ CSJ. SC. Sentencia de 30 de junio de 1980.

⁷ CSJ. SC. Sentencias de 24 de enero de 1983; del 20 de agosto de 1985; del 26 de febrero de 2001; del 12 de agosto de 2003; del 15 de noviembre de 2005; del 10 de junio de 2008; del 19 de septiembre de 2009; del 16 de diciembre de 2010.

de Justicia y de uno de los redactores del Código, pues mientras la entidad estima que se encuentra en las pretensiones, el segundo lo ubica en la sentencia.

En realidad las dos posiciones son acertadas porque el objeto del proceso no sólo se encuentra en las pretensiones, lo cual equivale a aceptar que igualmente debe buscarse en los hechos en que aquellas se apoyan, sino también en lo decidido en la sentencia y es por eso que en orden a precisar si existe el mismo objeto en el nuevo proceso deben estudiarse los hechos, las pretensiones y la sentencia del anterior para confrontarlo con los hechos y pretensiones del segundo a fin de precisar si existe identidad y caso de darse los otros requisitos, declarar la existencia de la cosa juzgada."

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que, esto se constata principalmente sobre el petitum de las demandas, de esta manera, observamos que la demandante establece como pretensiones las siguientes:

"1. Que se declare la responsabilidad del pago realizado por mi prohijado a los señores JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, mayor de edad, identificado con la CC No 10.225.828, como propietario del vehículo de placas TTG-200; a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., empresa identificada con Nit No 89000442-1, empresa ubicada en la ciudad de Armenia en la calle 53 No 16-04, representada legalmente por el señor JORGE LUIS CADAVID ROMERO, mayor de edad, identificado con CC No 7535429 y a la compañía de seguros ALLIANZ SEGUROS SA sucursal Manizales, ubicada en la Cra 23 B No 64-22 piso 5 y 60 barrio Laureles como llamada en garantía, pues posee la póliza de responsabilidad del vehículo.

2. Que se declare que para la fecha de los hechos en accidente de tránsito ocurrido el pasado 12 de junio de 2013, el vehículo de placas TTG-200, estaba bajo el cuidado y custodia del señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO y la empresa COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, bajo un contrato de transporte.

3. Que a consecuencia de la declaración de responsabilidad y cuidado y custodia solicitada en las pretensiones anteriores, se ordene el pago del dinero cancelado por mi prohijado por valor de \$ 213.000.000, pagados a consecuencia de la solidaridad, a los herederos del difunto ISRAEL GUTIERREZ; dineros que deberán ser cancelados por el señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, por tener el cuidado y custodia del vehículo de placas TTG-200 y ALLIANZ SEGUROS como por tener la cobertura en la póliza del vehículo descrito."

Por su parte en el medio de control de reparación directa se presentaron las siguientes pretensiones:

"1. Previa las declaraciones y condenas a que haya lugar le Solicito Señor Juez con todo respeto que se DECLARE ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE LA DEFENSA - POLICIA NACIONAL Y EN FUERO DE ATRACCIÓN LA EMPRESA COLDETRANS COLOMBIANA DE TRANSPORTES S.A - JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, por la muerte violenta del señor ISRAEL

GUTIERREZ VALENCIA, en hechos ocurridos el día 12 de Junio de 2013, cuando se desplazaba en calidad de conductor del vehículo Motocicleta de Placas XFG83A y colisionara con el Vehículo Tracto-camión de Placas TTG-200 de propiedad del señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIOA, en la vía Cauya - La Pintada, Kilómetro 31 + 750 Vereda la Sierra del Municipio de Riosucio (Caldas)

2. De acuerdo a la Ley 1395 de Junio de 2010, conforme al artículo 10 que reforma el Art. 211 del C.P.C., me permito manifestar bajo la gravedad del Juramento que para el reconocimiento, compensación, frutos, Indemnización o mejoras, como lo exige la ley desia referencia, los perjuicios se discriminan y se estiman así:

2.1. Por concepto de PERJUICIOS MORALES ocasionados como consecuencia directa de los momento de angustia, sufrimiento e intenso dolor que padeció el grupo familiar por el in suceso donde perdió la vida el señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, unas sumas equivalentes a CIN (100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES, salario que para la fecha de esta demanda están determinados en la suma de SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MCTE. (\$616.000), equivalentes a SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$61.600.000), conforme al precio que para tal fije el Ministerio del Trabajo e la fecha del fallo por concepto de perjuicios morales subjetivos en el siguiente orden:

(...)

2.2. Los demandados están obligados a pagar por concepto de PERJUICIOS MATERIALES O PATRIMONIALES a los demandantes OMAIRA GUERRERO LARGO (Compañera Permanente del fallecido) y los señores ASOMAN GUTIERREZ NAVARRETE, BERTILDA ROSA VALENCIA (Padres del Fallecido), quienes obran en nombre propio y en condición de Compañera Permanente y Padres del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA (Fallecido), quienes sufrieron el daño en forma directa reclaman perjuicios materiales en calidad de lucro cesante (Art. 1614 C.C.), consistentes en la privación de una ayuda económica que periódicamente recibían y recibirían de su Compañero Permanente e Hijo, el señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, quien laboraba como Administrador de la Asociación de Mineros la Montaña del Municipio de Quinchia - Risaralda, actividad por la cual percibía unos ingresos mensuales de Un Millón Quinientos Mil Pesos Moneda Corriente (51.500.000.00), con los cuales aportaba para la manutención de su núcleo familiar.

Estos perjuicios deben estimarse teniendo en cuenta los siguientes factores: Supervivencia de la víctima, ingresos presentes y futuros de la víctima, destinación de ingresos, supervivencia de sus padres y compañera permanente, falta de productividad del fallecido, lucro cesante, por lo menos a los intereses con corrección monetaria de la indemnización causada desde la fecha de su muerte (12 de Junio de 2013), hasta que se produzca su efectivo cumplimiento. Liquidación que deberá hacerse teniendo en cuenta el factor por renta, aceptado por la Jurisprudencia y la Doctrina para la indemnización futura, los cuales considero superiores a CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$140.000.000). (...)"

De esta manera, quien hoy funge como parte demandante en este proceso, fungía como demandada en el proceso de reparación directa, el objeto de litis debe aunarse a la contestación de la demanda realizada y al llamamiento en garantía que se realizó por su parte a la COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA. Pues allí donde se encuentra el fundamento de esta demanda. Lo cual se explicará al revisar el segundo elemento, es decir la **causa pretendi**.

Ahora bien, frente al objeto de litis, se observa que en el Acta de audiencia No. 093, de fecha 15 de mayo de 2017, del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales dentro del Rad. 201400566, se observa que en la fijación del litigio se estableció lo siguiente:

"A continuación, procede el Despacho a señalar los hechos más relevantes a fin de fijar el litigio:

(...)

4.) El vehículo involucrado en el accidente corresponde a un tracto – camión de placas TTG200 de servicio público, color naranja, y de propiedad del señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, siendo la empresa a la cual se encuentra registrado COLDETRANS S.A.

(...)

¿Es procedente declarar la responsabilidad administrativa de los demandados por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, en hechos ocurridos el día 12 de junio de 2013(...) con fundamento en la falla del servicio?

(...)

A continuación, se procede a interrogar a las partes si están de acuerdo con la fijación del litigio. Al respecto manifiestan que están conformes

Estando conformes las partes con la fijación del litigio, se procede a continuar con la diligencia"

Como puede observarse, las pretensiones de la demanda se enmarcaban en la responsabilidad de los demandados MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, COLDETRANS S.A., y los llamados en garantía ALLIANZ SEGUROS S.A. y COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA., con ocasión del accidente donde falleció el señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA al chocarse con el vehículo de placas TTG200.

La demandante pretende que se declare la "responsabilidad del pago" realizado por COLDETRANS S.A. a JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, ALLIANZ SEGUROS S.A. y la COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES, aspecto que claramente fue decidido en el proceso de reparación directa, dado que el demandante en dicho proceso buscaba la declaración de responsabilidad, la cual fue declarada por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas. Los argumentos para evitar cualquier tipo de declaración de responsabilidad debieron ser presentados en dicho proceso. O como bien lo hizo, presentar acción de tutela en contra de dicha providencia judicial, ante lo cual el juez constitucional no encontró yerro alguno.

De igual manera, pretende que se declare que el vehículo TTG200, estaba bajo el cuidado y custodia del señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO y la empresa COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, bajo un contrato de transporte y consecuentemente se ordene el pago del dinero cancelado por COLDETRANS S.A. Sin embargo, son circunstancias que tienen una relación inescindible con el petitum de la demanda de reparación directa y su objeto de litis, así como con la causa pretendí, como se analizará más adelante. Por lo tanto, fácilmente puede concluirse que nos encontramos con una identidad de objeto entre los dos procesos judiciales.

Identidad de causa

Frente a este aspecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que tiene relación con la causa pretendí, es decir, debe entenderse el hecho jurídico que sirve de fundamento a las súplicas⁸, vale decir, la situación que el actor hace valer en su demanda como cimiento de la acción⁹, distinto por supuesto de ésta, porque de un solo y mismo sustrato fáctico pueden derivar varias acciones¹⁰; es, igualmente, la "(...) narración del libelo, la relación del caso que ha originado los derechos y dado motivo a la reclamación en justicia"¹¹.

El hecho jurídico es equivalente, se ha puntualizado, cuando en el nuevo juicio se aduce el mismo elemento fáctico específico ya invocado en el anterior¹².

La identificación de la *causa petendi*, al igual que del objeto, debe investigarse en el ruego introductorio, fundamento de los juicios¹³, y responde, a diferencia de éste, a la cuestión de **por qué se litiga**¹⁴, con apoyo en qué, al soporte del *petitum*.

Es necesario aunar los postulados esgrimidos anteriormente frente al objeto del litigio y los de la causa pretendí.

Al respecto el Dr. Hernán Fabio López Blanco en su libro Código General del Proceso Parte General establece frente a este requisito que:

"(...) el nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior. La causa es la razón por la cual se demanda; los motivos que se tienen para pedir al Estado determinada sentencia. Esos motivos, por disposición del art. 82 del CGP, deben aparecer expresados en toda demanda y surgen de los hechos de ella, por cuanto de su análisis es como se puede saber si en verdad existe identidad de causa.

(...)

Téngase presente, tal como lo expresa el profesor Ramiro Bejarano en la ponencia antes citada, opinión que comparto, que: "En muchas ocasiones no es fácil

⁸ CSJ. SC. Sentencia de 27 de septiembre de 1945. En igual sentido: CSJ. SC. Sentencias de 26 de febrero y 24 de julio de 2001; 12 de agosto de 2003; 5 de julio de 2005; 10 de junio de 2008; y del 7 de noviembre de 2013.

⁹ CSJ. SC. Sentencia de 8 de febrero de 2016.

¹⁰ CSJ. SC. Sentencia de 27 de septiembre de 1945.

¹¹ CSJ. SC. Sentencia de 24 de febrero de 1948.

¹² CSJ. SC. Sentencia de 9 de mayo de 1952.

¹³ CSJ. SC. Sentencias del 31 de marzo de 1955 y del 24 de enero de 1983.

¹⁴ CSJ. SC. Sentencias de 20 de agosto de 1985; del 26 de febrero de 2001; del 12 de agosto de 2003; del 15 de noviembre de 2005; del 10 de junio de 2008; 19 de septiembre de 2009; y del 16 de diciembre de 2010.

establecer con nitidez si hay o no identidad de objeto y de causa, bien por la necesaria conexidad entre el asunto debatido y el que está por adelantarse, o sencillamente por audacia del actor y por ello encontramos razonable la solución adoptada por la Corte Suprema de Justicia, que al respecto sostiene: "Dejando de lado lo concerniente al límite subjetivo de la cosa juzgada (eadem conditio perso-narum), importa considerar ahora para los efectos del caso sub examen los dos factores integrantes del límite objetivo: la eadem res que se traduce esencialmente en que no le es permitido al juez desconocer o disminuir el bien jurídico disputado en el proceso precedente reconocido en la sentencia; y la eadem causa petendi o identidad de la causa de pedir, que se concreta en el motivo o fundamento inmediato del cual una parte deriva su pretensión deducida en el proceso.

«Si bien es cierto que hoy resulta indiscutible que el límite objetivo de la cosa juzgada lo forman en conjunto el objeto y la causa de pedir, también lo es que no siempre es fácil escindir lo que es materia de decisión en la sentencia, o sea su objeto en sí mismo considerado y la razón o motivo de la reclamación de tutela para un bien jurídico, desde luego que se trata de dos aspectos íntimamente relacionados entre sí. De ahí por qué sea recomendable examinar tales dos cuestiones como si se tratara de una unidad para determinar de esa forma en todo el conjunto de la res iudicium deductae tanto la identidad del objeto como la identidad de causa, sobre qué se litiga y por qué se litiga".

Como puede observarse fácilmente, en los dos procesos judiciales COLDETRANS S.A. buscó y busca establecer que no tenía ningún tipo de relación con el vehículo de placas TTG200, aunado a que dicho vehículo estaba transportando una mercancía de la empresa COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, por lo tanto no debía asumir ningún tipo de responsabilidad frente a la muerte del señor ISRAEL GUTIERREZ y posteriormente solicita el cobro de lo pagado en virtud de la orden del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.

El demandante podrá tratar de explicar que la causa pretendí deviene de dos circunstancias distintas, pero la realidad es que existe una identidad en dicha causa entre los dos procesos judiciales, y esto es tan cierto, que el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, de manera clara determinó la responsabilidad de los demandados, y de manera específica se refirió a la causa pretendí alegada hoy por el demandante en este proceso judicial, así:

"5. Responsabilidad solidaria del señor Juan Augusto Ríos Osorio y de COLDETRANS (...)

Ahora bien, aun cuando no reposa en el expediente el contrato de afiliación correspondiente, el Tribunal observa que el citado automotor se encontraba afiliado a la empresa COLDETRANS, pues dicho hecho fue aceptado expresamente como cierto por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y la citada compañía en las respectivas contestaciones de la demanda.

(...)

Así las cosas, para este Tribunal, tanto el señor Juan Augusto Ríos Osorio como la empresa COLDETRANS, deben responder solidariamente por el 50% en que se

estima que contribuyó el conductor del vehículo tractocamión en la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia.

(...)

b) Llamada en garantía por parte de la empresa COLDETRANS

Conforme se indicó en el acápite de antecedentes, COLDETRANS denunció el pleito a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., aduciendo que el tractocamión implicado transportaba carga de dicha empresa y, por lo tanto, tiene calidad de solidario y civilmente responsable (fls. 209 a 211, C.1) Acotó que para el mes de los hechos, COLDETRANS nunca cargó bajo su responsabilidad el referido vehículo.

A la denuncia en pleito, el Juzgado de primera instancia le imprimió el trámite de llamamiento en garantía.

Al respecto, esta Corporación estima que en el proceso no se acreditó el derecho legal o contractual a través del cual COLDETRANS pudiera exigirle a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. que responda por la condena que aquella debe asumir de manera solidaria con el señor Juan Augusto Ríos Osorio. Lo anterior, en la medida en que, independientemente del contrato para la carga de mercancía perteneciente a la cooperativa, que además no fue allegado al expediente, lo cierto es que el vehículo tractocamión siguió estando vinculado a la empresa transportadora, lo que impide que ésta pueda exonerarse de la responsabilidad extracontractual.

No hay prueba alguna en el expediente que permita afirmar que el hecho que la carga que transportaba el tractocamión el día del accidente fuera propiedad de la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., implica que ésta debía asumir la responsabilidad de guardián de la actividad que el vehículo realizaba.

Recuérdese que, como se indicó anteriormente, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la empresa a la cual está afiliado el vehículo es quien tiene el control efectivo del mismo al momento de administrarlo con facultad de utilizarlo y de designar incluso al personal que lo opera, sin intervención del propietario; y que sólo cuando se demuestre que la empresa no tiene dicho control del automotor, entrarían a responder solidariamente el propietario, quien contrató y el conductor, por las obligaciones que surjan del contrato de transporte, conforme al artículo 991 del Código de Comercio. En este caso, se repite, COLDETRANS no acreditó que no tuviera el control efectivo del vehículo.

Bajo ese entendimiento, esta Sala de Decisión declarará probada la excepción formulada por la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. y que denominó: "INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD"; absteniéndose entonces de resolver sobre los demás medios exceptivos propuestos por la llamada en garantía."

Puede dilucidarse fácilmente, que todos los aspectos que fundamentan la demanda presentada por COLDETRANS S.A. o la causa pretendí, fueron discutidos y resueltos por el Tribunal Contencioso de Caldas. Es decir que existe una clara identidad en la causa entre los dos procesos judiciales.

Tal situación puede observarse incluso en los fundamentos de derecho de la demanda, cuando se establece lo siguiente:

“En cuanto a lo que nos atañe, queremos indicar que el señor JUAN AUGUSTO, fue condenado por ser el propietario del vehículo objeto del siniestro, pero a la empresa COLDETRANS, se condenó por la simple razón de que en el debatir probatorio de dicho proceso se indicó, sin razón formal y probatoria, que el vehículo estaba afiliado a la empresa COLDETRANS, cosa que nunca ha existido y nunca fue así.

Lo que sucedió realmente fue que el señor JUAN AUGUSTO RIOS, contrato un servicio de transporte de su vehículo con la COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, y el siniestro sucedió cuando el vehículo estaba ejecutando el contrato pactado entre dichas partes. Como no se acreditó dentro del proceso de reparación directa que coldetrans no hubiera tenido el vehículo en su poder para la época de los hechos, SE QUIERE DEJAR EN CLARO, QUE NO EXISTE PRUEBA DE LA AFILIACION CON COLDETRANS, SOLO UN AFIRMACION DEL SEÑOR JUAN AUGUSTO EN EL PROCESO DE LA VINCULACION, entonces el despacho judicial condeno a mi porhijada y desvinculo a la COOPERATIVA QUINDIANA de la responsabilidad.

(...)

Así las cosas, no puede existir cosa juzgada, pues no se quiere debatir el hecho de la muerte del señor ISRAEL, pues es claro que fue culpa del desempeño del vehículo de propiedad del señor JUAN AUGUSTO, sino de quien al momento del siniestro estaba en cuidado y custodia del vehículo, y son quienes deben responder por el pago realizado en el año 2022 por parte de mi porhijado.”

Por más esfuerzos argumentativos que se traten de aunar para tratar de explicar que no existe cosa juzgada, la realidad es que en definitiva existe identidad de objeto y de causa, dado que los aspectos relacionados con la responsabilidad de las partes del proceso de reparación directa, así como de los llamamientos en garantía fueron discutidos y resueltos por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.

De manera reiterada y enfática se trata de explicar que no existe cosa juzgada porque no se debate el hecho de la muerte del señor ISAREL, pero al mismo tiempo, se discute la forma en que el Tribunal Contencioso Administrativo decidió frente a la responsabilidad de cada una de las partes, lo cual claramente es un elemento esencial para discutir los aspectos relacionados con la muerte del señor ISRAEL, esto no permite concluir que el silogismo propuesto por el demandante sea cierto, por el contrario, debe concluirse que sí existe cosa juzgada al observarse la misma causa pretendí.

Debe reiterarse que, la demandante debió presentar estos argumentos en dicho proceso judicial, o como efectivamente lo hizo, exponer los yerros que considerara en la acción de tutela en contra de la providencia judicial. Pero esta no es la instancia para reabrir un debate jurídico que ya feneció.

Frente a la acción de tutela contra providencia judicial, presentada por parte de COLDETRANS S.A., se observa que mediante sentencia del 17 de mayo de 2023 dentro del radicado 11001-03-15-000-2022-06588-00, la subsección B de la Sección Tercera del

Consejo de Estado resolvió “PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Coldetrans SA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”

La demandante impugnó dicha sentencia, y el día 4 de septiembre de 2023 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió

“Modificar la sentencia del 17 de mayo de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, la cual quedará así: **PRIMERO. Declarar improcedente** la acción de tutela presentada por la Compañía Colombiana de Transportes - COLDETRANS S.A., de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.”

Frente a esta última providencia, el Consejo de Estado resaltó algunos aspectos relevantes para este proceso civil, que permiten demostrar que el demandante pretende reabrir nuevamente una discusión que ya se zanjó en el proceso de reparación directa y que trató de reabrir en la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“No obstante, a diferencia de lo sostenido por el juez de tutela de primera instancia, esta Subsección considera que la solicitud de amparo no supera el requisito de relevancia constitucional, teniendo en cuenta que la sociedad accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso de reparación directa.

Si bien la parte actora aduce no estar de acuerdo con la decisión de la autoridad accionada, porque considera que no valoró los medios de prueba correctamente, de manera que la exonerara de responsabilidad, lo cierto es que no presenta un argumento contundente que desvirtúe la decisión acogida por la autoridad judicial y se limita a reiterar lo dicho en el curso de proceso cuando formuló la denuncia del pleito frente a la Cooperativa Quindiana Transportes, para trasladarle toda la responsabilidad por el accidente de tránsito que dio lugar al proceso de reparación directa. Desde el inicio del proceso ordinario, COLDETRANS S.A. alegó que era aquella cooperativa la vinculada al tractocamión involucrado en el accidente y, por tanto, quien tenía la guarda del vehículo, argumentos que fueron analizados por el Tribunal Administrativo de Caldas, así:

(...)

Obsérvese que el Tribunal Administrativo de Caldas analizó con detalle no sólo la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo, sino también de la empresa aquí accionante, COLDETRANS S.A., y realizó un estudio pormenorizado de las razones por las cuales no aceptó el llamamiento en garantía de la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., del cual no es posible inferir, como se hace en la solicitud de amparo, que la corporación judicial accionada ignoró el manifiesto de carga. Por el contrario, lo que se entiende es que el Tribunal en todo momento parte del hecho cierto de que la carga era propiedad de la Cooperativa, pero con fundamento en la orientación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, concluyó que, más allá de eso, lo determinante para endilgar la responsabilidad era conocer la empresa a la que se encontraba vinculado o afiliado el tractocamión.

A esto se suma que el Tribunal señaló que no se aportó el contrato de transporte, mas no el manifiesto aludido, que es diferente. Además, tampoco se allegó un contrato de vinculación o cualquier otro documento que acredite que el vehículo de estaba vinculado o afiliado ya fuera temporal o de manera permanente a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.; en su lugar, el Tribunal acudió a las afirmaciones realizadas en la demanda y aceptadas por COLDETRANS S.A. en la contestación, según las cuales el automotor se encontraba vinculado a esta última empresa, sin que dicha apreciación se haya desvirtuado por otros medios de prueba.

(...)

Bajo las consideraciones que anteceden, para la Sala es evidente que los argumentos alegados en la tutela fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido por la autoridad judicial demandada. Es claro que la presente solicitud de amparo deviene en improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso ordinario, en torno a la responsabilidad solidaria de la Nación – Policía Nacional, el señor Juan Augusto Ríos Osorio (propietario del automotor) y COLDETRANS S.A. en el accidente de tránsito ocurrido el 12 de junio de 2013, en el que falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia.

(...)

En suma, la solicitud de amparo deviene en improcedente, por incumplimiento de la exigencia de relevancia constitucional, toda vez que, respecto de los defectos sustantivo, procedimental y el error inducido, COLDETRANS S.A. no cumplió con la carga argumentativa, y frente al defecto fáctico es evidente que busca revivir la discusión planteada, como si la acción de tutela fuera una instancia adicional del proceso ordinario, cuestiones que, en todo caso, ya fueron analizadas y decididas en la providencia proferida el 26 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas."

Como puede observarse, y como bien lo refiere el honorable de Consejo de Estado, en ambos procesos trata de reabrirse un debate que ya fue analizado de manera amplia por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, pues tanto la reparación directa, el proceso de tutela contra providencia judicial y este proceso verbal de menor cuantía tienen los mismos fundamentos facticos y jurídicos, existiendo una clara cosa juzgada.

Si en todo caso, la demandante considera que la defensa realizada en el proceso de reparación directa no fue adecuada, debe evaluar el inicio de la respectiva acción de responsabilidad contractual en contra del profesional del derecho o de ser el caso en contra del representante legal en los términos de la Ley 222 de 1995 bajo el régimen de la responsabilidad de los administradores.

Identidad de las partes

Frente a este último elemento, la Corte Suprema de justicia ha manifestado que, la **identidad de partes**, se concreta no en la equivalencia física, sino jurídica¹⁵ de los sujetos vinculados al pleito; su fundamento racional consiste, en esencia, en el principio de relatividad de las sentencias, positivizado en el artículo 17 del Código Civil, según el cual,

¹⁵ CSJ. SC. Sentencias de 30 de junio de 1980; del 24 de abril de 1984 y del 24 de julio de 2001.

y en línea de principio, la fuerza obligatoria de un fallo judicial se limita a las personas que han intervenido en el proceso en el cual se profirió¹⁶.

Como se mencionó someramente líneas atrás, las pretensiones de la demanda de reparación directa se enmarcaban en la responsabilidad de los demandados MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, COLDETRANS S.A., y los llamados en garantía ALLIANZ SEGUROS S.A. y COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA., con ocasión del accidente donde falleció el señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA al chocarse con el vehículo de placas TTG200.

Los demandantes en este proceso son los familiares del fallecido ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, y las demás partes son:

- MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL
- JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO
- COLDETRANS S.A.
- ALLIANZ SEGUROS S.A.
- COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA.

En este proceso judicial, COLDETRANS S.A. actúa como parte demandante y como partes demandadas las siguientes personas:

- JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO
- ALLIANZ SEGUROS S.A.
- COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA.

Como puede observarse concurren al proceso las mismas partes en los dos procesos, excluyendo claramente a los demandantes del proceso de reparación directa y el - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, pues no tienen relación con la parte del objeto de litis y causa pretendida de la hoy demandante.

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que existe identidad de partes, identidad en el objeto e identidad en la causa entre el proceso de reparación directa mencionado y el proceso judicial que pretende iniciar COLDETRANS S.A., por lo tanto, deberá declararse la existencia de cosa juzgada.

4.2. NO EXISTE FUNDAMENTO PARA EL COBRO SOLICITADO

El demandante pretende se declare la responsabilidad del pago realizado por COLDETRANS S.A. a los JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, ALLIANZ SEGUROS S.A. y COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, y como consecuencia de ello se ordene el pago de lo cancelado con ocasión de la orden del Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas.

Sin embargo, no existe ningún tipo de fundamento que sustente la solicitud realizada por el demandante, dado que de manera clara el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, determinó la responsabilidad por la muerte del señor ISRAEL GUTIERREZ, determinando frente a la responsabilidad de COLDETRANS S.A. que:

¹⁶ CSJ. SC. Sentencias del 24 de abril de 1984, del 24 de julio de 2001; del 5 de julio de 2005; y del 7 de noviembre de 2013.

"5. Responsabilidad solidaria del señor Juan Augusto Ríos Osorio y de COLDETRANS (...)

Ahora bien, aun cuando no reposa en el expediente el contrato de afiliación correspondiente, el Tribunal observa que el citado automotor se encontraba afiliado a la empresa COLDETRANS, pues dicho hecho fue aceptado expresamente como cierto por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y la citada compañía en las respectivas contestaciones de la demanda.

(...)

Así las cosas, para este Tribunal, tanto el señor Juan Augusto Ríos Osorio como la empresa COLDETRANS, deben responder solidariamente por el 50% en que se estima que contribuyó el conductor del vehículo tractocamión en la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia.

(...)

De conformidad con lo expuesto en esta providencia, se concluye que en este caso se acreditó la existencia de responsabilidad extracontractual por parte de la Policía Nacional (en un 50%) y del señor Juan Augusto Ríos Osorio y COLDETRANS (en un 50% de manera solidaria), en el fallecimiento del señor Israel Gutiérrez Valencia. En ese orden de ideas, habrá de modificarse la providencia objeto de apelación, para declarar igualmente responsables del daño antijurídico al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS, así como para precisar los porcentajes de participación de los mismos en el hecho dañino.

Adicionalmente, se condenará a Allianz Seguros S.A. a que reembolse el valor a que está obligado a pagar el señor Juan Augusto Ríos Osorio, llamante en garantía, con ocasión de este proceso.

De otra parte, se negará el llamamiento en garantía frente a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda."

Teniendo en cuenta lo anterior, puede observarse que el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas determinó de manera clara la responsabilidad extracontractual en este caso, y determinó *"igualmente responsables del daño antijurídico al señor Juan Augusto Ríos Osorio y a COLDETRANS"*, esto implica que ambos debían asumir el 25% del total de la condena. Como en efecto sucedió, por lo tanto, no existe fundamento alguno para solicitar el cobro de lo pagado.

Distinto hubiese sucedido si COLDETRANS S.A. hubiera pagado la totalidad de este 50%, dado hubiese podido recobrar en contra de JUAN AUGUSTO RIOS o de ALLAINZ SEGUROS S.A. por el 25%. En igual sentido, si la compañía de seguros hubiese asumido la totalidad, claramente hubiera podido solicitar el cobro del 25% a COLDETRANS S.A.

No existe un fundamento factico o jurídico para el inicio de la acción que se impetra, como se indicó en el acápite anterior, si COLDETRANS S.A. no estaba de acuerdo con la forma en que el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas determinó la responsabilidad extracontractual de las partes en el proceso, debió ejercer una defensa distinta dentro del mismo. O presentar una acción de tutela en contra de dicha providencia judicial, como en efecto lo hizo, sin embargo, las pretensiones de la misma no fueron favorables.

Aunado a lo anterior, la afirmación respecto a que nunca ha existido una afiliación o registro de parte de COLDETRANS S.A. con el camión de placas TTG200, ni verbal ni documentalmente, no es precisa, ni ajustada a la realidad fáctica y jurídica del caso.

Es importante señalar que cuando el señor JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO adquirió, junto con otras personas, el 100% de la composición accionaria de la sociedad COLDETRANS S.A., lo hizo con la finalidad de contar con una empresa de transporte debidamente constituida, que permitiera garantizar una carga más fija y estable para los vehículos de propiedad de algunos de los socios, y, también facilitar el transporte de bienes de interés para ellos.

Esta finalidad, que fue conocida, compartida y ejecutada por los accionistas, implicó la utilización efectiva de la infraestructura jurídica y operativa de COLDETRANS S.A., incluyendo la afiliación de vehículos a su operación de transporte, entre ellos el tractocamión identificado con las placas TTG200.

Debe recordarse que, en materia mercantil, los contratos se rigen por el principio de consensualidad, conforme lo establece el artículo 824 del Código de Comercio Colombiano, según el cual los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, salvo disposición legal en contrario. En ese sentido, la inexistencia de un documento escrito no invalida ni desvirtúa la existencia de un acuerdo de afiliación o vinculación entre la empresa y el vehículo mencionado, máxime cuando existen hechos, conductas y circunstancias objetivas que dan cuenta de una relación contractual tácita o verbal.

Estos aspectos relacionados con el registro, vinculación y/o afiliación del vehículo fueron reconocidos dentro del proceso judicial de reparación directa.

Ahora bien, frente a la responsabilidad que debió asumir también la COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, este es un aspecto que debió discutirse dentro del proceso de reparación directa, y que podría devenir de una posible indebida estructuración de la defensa de COLDETRANS S.A., pero de ningún modo puede solicitarse cobro alguno a mi poderdante, y de ser el caso, este cobro deberá ser asumido por la compañía de seguros, llamada en garantía en este proceso judicial.

4.3. PRESCRIPCIÓN Y/O CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Se plantea como excepción de mérito la prescripción y/o caducidad de la acción incoada por la parte demandante, con fundamento en los artículos 2535 y 2536 y 90 del Código General del Proceso.

Debe resaltarse que, en todo caso los hechos que dan origen al litigio ocurrieron el 12 de junio de 2013, es decir, hace más de once (11) años respecto del momento de presentación de la demanda. Este lapso excede con creces cualquier término de

prescripción o caducidad previsto por la ley para este tipo de acciones, sean estas contractuales, extracontractuales o comerciales.

La Ley 791 de 2002 redujo los términos generales de prescripción en materia civil, estableciendo un límite máximo de diez (10) años. Así las cosas, no existe ningún término de prescripción en el ordenamiento jurídico colombiano que supere ese límite temporal, y por tanto, bajo ninguna óptica podría entenderse que la acción ejercida es viable una vez transcurrido ese periodo.

En ese sentido, así el demandante manifieste su voluntad de ejercer el derecho material y considerar que la acción no se encuentra prescrita, lo cierto es que dicho ejercicio está sujeto a los límites temporales dispuestos por el legislador. Por ende, si al momento de la presentación de la demanda ya ha transcurrido el término legalmente previsto, como ocurre en este caso, la acción resulta jurídicamente inviable, y debe declararse su caducidad o prescripción, según corresponda.

Por lo tanto, se solicita al despacho que, declare probada la excepción de mérito propuesta y se declare la no prosperidad de las pretensiones solicitadas por la parte demandante.

5. SOLICITUD EMISIÓN DE SENTENCIA ANTICIPADA

Teniendo en cuenta la contestación a los hechos y las excepciones de mérito formuladas, con fundamento en lo establecido en el numeral 3 del artículo 278 del Código General del Proceso, al observarse probada la cosa juzgada, respetuosamente solicitamos a su honorable despacho se emita sentencia anticipada frente a la totalidad de las pretensiones y se declare la terminación del proceso, artículo que establece lo siguiente:

“Artículo 278. Clases de providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.

Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.

En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

- 1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.*
- 2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.*

3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa.”

De esta manera, existiendo identidad entre las partes, identidad en el objeto e identidad en la causa entre el proceso de reparación directa mencionado y el proceso judicial que pretende iniciar COLDETRANS S.A., se observa probada la cosa juzgada, debiendo emitirse sentencia anticipada.

SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA PROPUESTOS POR LA PARTE DEMANDANTE

Ruego que en su valor justo se tengan como tales en su sano juicio y persuasión racional y sana crítica, al momento de la valoración señor juez, aquellas que cumplan cabalmente con las condiciones descritas en sentencia SU-768 de 2014 en relación con el modo y tiempo para su presentación, reservándome el derecho de oposición en su momento oportuno.

6 PRUEBAS

6.1 Pruebas documentales:

Adjunto a la presente contestación se encuentran los siguientes elementos probatorios de carácter documental:

- Poder Especial otorgado por el demandado
- Copia del expediente del proceso de reparación directa con radicado No. 17001-33-33-004-2014-00566-00, el cual podrá ser consultado en el siguiente link: [EXPEDIENTE TTG200](https://onedrive.live.com/?id=3D1D768467922C3C%21s4041892b8c9a4c9285af0eb4f11d533e&cid=3D1D768467922C3C)

(<https://onedrive.live.com/?id=3D1D768467922C3C%21s4041892b8c9a4c9285af0eb4f11d533e&cid=3D1D768467922C3C>)
- Se anexa copia del acta de audiencia No. 093, de fecha 15 de mayo de 2017, del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales dentro del Rad. 201400566
- De considerarse necesario se solicita se ordene el traslado de la totalidad del expediente con radicado No. 17001-33-33-004-2014-00566-00 que reposa en el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales
- Sentencia de tutela de primera instancia de fecha 17 de mayo de 2023 Rad. 2022-06588 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
- Sentencia de tutela de segunda instancia de fecha 4 de septiembre de 2023 Rad. 2022-06588 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

6.2 interrogatorio de parte

Sírvase señor Juez citar y, hacer comparecer a la señora ZORAIDA DEL SOCORRO OROZCO, identificada con cedula de ciudadanía 42.010.815, demandante dentro del presente proceso, para que en audiencia pública cuya fecha y hora se servirá usted fijar, bajo la gravedad de juramento absuelva el interrogatorio que verbalmente o por escrito le formularé sobre los hechos de la demanda y su eventual contestación, además del posible reconocimiento de documentos que sean necesarios.

6.3 Testimoniales

Ruego a su honorable despacho se sirva decretar la toma de testimonio del señor:

CARLOS ALBERTO ALFONSO OROZCO, identificado con la C.C 10.071.635, residente en la CI 31 N 11-34 de la ciudad de Pereira (Risaralda) Tel. 3255352, quien depondrá frente a la relación del vehículo TTG200 con la empresa COLDETRANS S.A., como primer representante legal posterior a la adquisición del 100% de las acciones de dicha compañía por parte del señor Juan Augusto Ríos Osorio y otras personas.

7. NOTIFICACIONES

- El suscrito podrá ser notificado en la Cll 147 # 9 60 Ed. Scala 28 Ap. 405 (Bogotá D.C) . Al correo electrónico nicolas.rios01@hotmail.com o al número telefónico 3185325420.
- Mi prohijado podrá ser notificado en la Calle 22 # 17 a 74 La pradera (Dosquebradas / Risaralda) Cel. 3155400869, Correo: Jaugustorioso@hotmail.com

Agradeciendo la atención prestada,



NICOLAS RIOS GONZALEZ

CC. 1.088.325.095 de Pereira

TP. 289.040 del C.S.J.

nicolas.rios01@hotmail.com



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06588-01
Demandante: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES
COLDETRANS S.A.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada / Se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 17 de mayo de 2023¹, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la tutela.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 12 de diciembre de 2022, por medio de apoderada, la Compañía Colombiana de Transportes - COLDETRANS S.A. presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, especialmente las garantías de defensa y contradicción, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

1.- TUTELAR los derechos de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, al Debido Proceso, el Derecho de Defensa y Contradicción, el Derecho de Igualdad (procesal) y los principios

¹ Se advierte que, el 2 de agosto 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

de Confianza legítima y el de Buena Fe y deber de imparcialidad del juez para el trámite del mismo y análisis integral del expediente, de los que es titular COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, quebrantados por Sala Quinta de decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, en el fallo de fecha veintiséis (26) de Agosto de dos mil veintidós (2022) mediante el Accionado, modifíco el fallo de primera instancia y profirió condena en contra de COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, sin que esta tuviera responsabilidad alguna en el evento que origina la demanda, limita la responsabilidad de la demandada POLICIA NACIONAL AL 50%, exonerando además a la empresa de transporte terrestre automotor de carreta que tenía la vinculación temporal del vehículo de placas TTG200, desconociendo la prueba irrefutable de la responsabilidad de empresa de transporte COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, y finalmente establece un deducible frente a la póliza de ALLIANZ (llamada en garantía) superior a lo que establecido en la póliza de autos No. 021226541/41, dentro del proceso acción de Reparación Directa, bajo radicado con número de radicado 17001333300420140056600 tramitado contra COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, y otros.

2.- En consecuencia, se pretende mediante esta tutela como instrumento excepcional y residual, revocar y/o modificar las decisiones proferidas en segunda instancia por Sala Quinta de decisión, integrada por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas, AUGUSTO RAMON CHÁVEZ MARÍN, MARTIN ANDRES PATIÑO MEJIA Y CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, que resolvió el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia dentro del proceso ya referenciado.

3.- Se garanticen los derechos fundamentales conculcados a la demandada COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A. y se profiera el fallo o fallos sustitutivos a que haya lugar que reestablezcan y salvaguarden los derechos fundamentales conculcados a COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A y corrija las vías de hecho y los defectos fácticos expuestos y explicados.

4.- Se tomen las demás medidas que sean idóneas para la protección integral de los derechos fundamentales de COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, la parte actora narró que el 12 de junio de 2013 ocurrió un accidente de tránsito en un retén de la Policía Nacional, en el que falleció una persona, cuyos familiares promovieron el medio de control de reparación directa, que cursó ante el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales bajo el radicado 17001333300420140056600.

El juzgado de conocimiento dictó sentencia el 5 de diciembre de 2019, en la que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, por considerar que la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia era atribuible únicamente a la Policía Nacional, razón por la cual exoneró a los demás demandados de cualquier responsabilidad, incluyendo a la aquí accionante.

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional interpuso recurso de apelación y, en sentencia del 26 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas modificó la decisión del *a quo*, en el sentido de condenar solidariamente al señor Juan Augusto Ríos Osorio (propietario del tractocamión que causó el accidente) y a COLDETRANS S.A.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora manifestó que la acción de tutela es procedente porque cumple los requisitos generales y específicos exigidos por la jurisprudencia para cuestionar una providencia judicial.

A su juicio, la sentencia proferida el 26 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en defecto sustantivo, procedimental, fáctico e inducido.

Al respecto, adujo que la autoridad judicial demandada consideró que al proceso no se allegó copia del manifiesto de carga No. 9651957, expedido por la Cooperativa Quindiana Transportes, cuando lo cierto es que esa prueba fue incorporada en la audiencia de pruebas.

Sostuvo que, por esa razón, la accionada no valoró tal documento y, en consecuencia, encontró responsable a COLDETRANS S.A., desconociendo que al momento del accidente la Cooperativa Quindiana Transportes, quien expidió el manifiesto de carga, tenía la vinculación temporal del vehículo causante del accidente y era «*guardián de la cosa*»; mientras que el señor Juan Augusto Ríos Osorio, como propietario, lo explotaba económicamente.

Lo anterior, en su criterio, muestra una decisión parcializada que favorece a la parte demandante y a la demandada Policía Nacional, toda vez que el Tribunal accionado

presumió la responsabilidad del conductor del tractocamión y descartó la de la Policía, cuando es evidente que el retén no cumplía las exigencias mínimas de seguridad. Además, no se percató de que la víctima fatal conducía su motocicleta con exceso de velocidad.

Refirió que el Decreto 173 de 2001, que exigía la emisión del registro nacional de transporte para la matrícula del vehículo, fue derogado por el Decreto 1499 de 2009 y, por ende, no es válido señalar que el vehículo estaba vinculado a COLDETRANS S.A. Esto significa que dicha sociedad no intervino en el contrato de transporte que ejecutaba el tractocamión involucrado en el accidente, no contrató a su conductor y no obtuvo beneficio económico o de ninguna otra índole.

Adicionalmente, señaló que la providencia censurada tuvo como acreditados el lucro cesante y el perjuicio moral, sin que hubiera prueba suficiente para ello.

De otra parte, sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en error en la valoración de la póliza que aseguraba al tractocamión en cuestión, al señalar que el valor asegurado es de \$3.000.000.000 y el deducible de \$1.100.000.000², que es el límite de pago, pues con ello dejó a COLDETRANS sin cobertura, por ser el valor a pagar inferior al deducible determinado por el Tribunal.

Por último, afirmó que el Tribunal demandado erró al no darle credibilidad a los testigos que declararon que la víctima conducía con exceso de velocidad.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 13 de diciembre de 2022, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la demanda, dispuso que aquel se notificara al Tribunal Administrativo de Caldas, al que requirió para que se pronunciara. Asimismo, vinculó como terceros con interés al Juzgado Tercero Administrativo de Manizales, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a los señores Omaira Guerrero Largo, Arsoman Gutiérrez Navarrete, Bertilda Rosa Valencia, Álvaro Antonio, Fernando, Otoniel y Uber Gutiérrez Valencia, quienes conformaron el extremo activo del proceso ordinario.

² El deducible pactado era de \$1.100.000.

En auto posterior, fechado el 14 de marzo de 2023, vinculó a Allianz Seguros S.A., por considerar que tiene interés en las resultas del proceso, toda vez que fue llamada en garantía en el proceso ordinario.

2.2. El juez tercero administrativo de Manizales afirmó que la acción de tutela carece de sustento jurídico y fáctico, al tiempo que pretende revivir el debate probatorio que ya se surtió en el proceso ordinario, para que se decida la controversia en una tercera instancia.

2.3. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional estimó que la solicitud de amparo es improcedente, toda vez que no se acredita la existencia de un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente, que amerite la intervención urgente del juez de tutela.

2.4. Allianz Seguros S.A. señaló que no se presenta el defecto fáctico invocado frente al análisis de la póliza por ella expedida; por tanto, en ese punto no advierte anomalía alguna cometida por la autoridad judicial accionada. Agregó que es cierto que el Tribunal incurrió en un error de digitación en relación con el valor del deducible, pero esto se solucionó en la parte resolutive, sin que sea trascendente el yerro alegado.

Agregó que no le asiste ningún interés a COLDETRANS S.A. en la decisión adoptada frente a Allianz, pues dicha sociedad no es parte del contrato de seguro, ni fue establecida como beneficiaria de la prestación asegurada; además, no es beneficiaria de la condena que le fue impuesta a la aseguradora.

2.5. Las personas que conformaron el extremo demandante en el proceso de reparación directa guardaron silencio respecto de la acción de tutela instaurada por COLDETRANS S.A.

3. Fallo impugnado

La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 17 de mayo de 2023, negó la solicitud de amparo.

Encontró satisfechos los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela, incluido el de relevancia constitucional, y centró el estudio en el defecto fáctico invocado en virtud de la valoración probatoria del manifiesto de carga, el informe de accidente de tránsito y la póliza de seguro, por considerar que los demás vicios y defectos invocados no fueron explicados con suficiencia.

Sostuvo que a pesar de que el Tribunal demandado no hizo alusión expresa al manifiesto de carga, tal omisión no tiene la entidad para configurar el defecto fáctico alegado, toda vez que lo trascendental no era determinar de quién era la carga, sino a qué empresa estaba vinculado el tractocamión. Además, el citado manifiesto tampoco acredita que el vehículo tuviera una vinculación temporal con la Cooperativa Quindiana de Transportes Ltda., pues tan solo da cuenta del contrato de carga y de la mercancía transportada, por lo que carece de la relevancia que pretende darle la parte actora para trasladarle la responsabilidad a dicha cooperativa.

El *a quo* también descartó la indebida valoración de la póliza de seguro, dado que, aunque en la parte considerativa del fallo se hizo referencia a un deducible por valor de \$1.100.000.000, también lo es que en la parte resolutive se aludió al valor asegurado y al deducible que el asegurado debe pagar y, en consecuencia, no se advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales de COLDETRANS S.A.

Finalmente, señaló que en el informe del accidente de tránsito no está acreditado el supuesto exceso de velocidad que, según la sociedad accionante, fue omitido por el Tribunal Administrativo de Caldas.

4. Impugnación

La apoderada de COLDETRANS S.A. solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en su lugar, se acceda al amparo.

Señaló que el fallador de primera instancia omitió pronunciarse sobre la responsabilidad adicional que el Tribunal Administrativo de Caldas endilgó al conductor del vehículo involucrado en el accidente; desestimó el valor probatorio del manifiesto de carga, porque no tuvo en cuenta que mediante aquel se realizó la vinculación del tractocamión a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., y no consideró que el control del rodante siempre estuvo en cabeza de su propietario, señor Ríos Osorio, quien se benefició del producto de la operación de transporte.

Trajo a colación el concepto rendido por el Ministerio de Transporte No. 20091340234301 del 10 de junio de 2009, en el que hizo referencia al Decreto 173 de 2001, para señalar que mediante el manifiesto de carga se vinculan automotores

a una empresa no propietaria de vehículos de manera transitoria o permanente. Precisó que este concepto se encontraba vigente para la época de los hechos, mientras que la providencia en la que el *a quo* fundamentó la decisión era posterior.

Seguidamente, refirió las diferencias existentes entre la vinculación en el transporte de pasajeros y el transporte de carga, para insistir en que con el manifiesto de carga se prueba la vinculación del vehículo causante del accidente a la Cooperativa Quindiana Transportes, y con ello la responsabilidad solidaria de esta empresa y exoneración total de la accionante, quien no hizo parte de la negociación.

Por último, reiteró que la sentencia censurada descartó la responsabilidad de la Policía Nacional, desconociendo que, según los testimonios recaudados, el retén no cumplía las condiciones mínimas de seguridad exigidas, sumado a que valoró indebidamente el informe de accidentes y los testimonios que dan cuenta de una concurrencia de culpas, porque el motociclista conducía con exceso de velocidad.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo del 17 de mayo de 2023, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante el cual se negó la solicitud de amparo.

La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se reúna esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende, vulneraron los derechos fundamentales invocados por COLDETRANS S.A.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014³, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a

³ Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello *«[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»*.

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente⁴ reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

- **Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto**

De entrada, al igual que el *a quo*, la Sala considera que, respecto de los defectos sustantivo, procedimental y el error inducido, COLDETRANS S.A. no explicó con claridad suficiente en qué consiste la violación alegada. En efecto, la sola mención

⁴ Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

que hace el solicitante frente dichos vicios no basta para considerar que se cumpla con el primer elemento del requisito de relevancia constitucional, puesto que resulta necesario que los señalamientos que se hagan en la demanda de tutela se sustenten razonablemente, a fin de que el juez cuente con los parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos fundamentales.

En relación con el defecto fáctico, tanto de la lectura de la solicitud de amparo como de la impugnación se colige el desacuerdo de la parte actora con la valoración probatoria realizada por la autoridad accionada desde tres aristas a saber: (i) omisión de valoración del manifiesto de carga; (ii) valoración indebida del informe de accidentes; (iii) valoración indebida de la póliza de seguro emitida por Allianz S.A.

No obstante, a diferencia de lo sostenido por el juez de tutela de primera instancia, esta Subsección considera que la solicitud de amparo no supera el requisito de relevancia constitucional, teniendo en cuenta que la sociedad accionante pretende convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso de reparación directa.

Si bien la parte actora aduce no estar de acuerdo con la decisión de la autoridad accionada, porque considera que no valoró los medios de prueba correctamente, de manera que la exonerara de responsabilidad, lo cierto es que no presenta un argumento contundente que desvirtúe la decisión acogida por la autoridad judicial y se limita a reiterar lo dicho en el curso de proceso cuando formuló la denuncia del pleito frente a la Cooperativa Quindiana Transportes, para trasladarle toda la responsabilidad por el accidente de tránsito que dio lugar al proceso de reparación directa. Desde el inicio del proceso ordinario, COLDETRANS S.A. alegó que era aquella cooperativa la vinculada al tractocamión involucrado en el accidente y, por tanto, quien tenía la guarda del vehículo, argumentos que fueron analizados por el Tribunal Administrativo de Caldas, así:

De conformidad con el certificado expedido el 3 de septiembre de 2014 por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de Osos (fl. 69, C.I), el tractocamión de placas TTG200 es propiedad del señor Juan Augusto Ríos Osorio y, en tal sentido, recae en él la obligación de reparar el daño que fuere causado con su vehículo a terceros.

Ahora bien, aun cuando no reposa en el expediente el contrato de afiliación correspondiente, el Tribunal observa que el citado automotor se encontraba

afiliado a la empresa COLDETRANS, pues dicho hecho fue aceptado expresamente como cierto por el señor Juan Augusto Ríos Osorio y la citada compañía en las respectivas contestaciones de la demanda.

En reciente sentencia del 5 de abril de 2021⁵, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó lo siguiente respecto de la responsabilidad solidaria que se predica por parte del propietario del vehículo con el cual se genera un daño y de la empresa de transporte a la cual se encuentra afiliado éste:

En relación con esta temática tiene dicho la Corte que:

(...) por principio la prueba por cualquier medio probatorio idóneo de la afiliación o vinculación del vehículo destinado al transporte, 'legítima suficientemente a la empresa afiliadora para responder por los perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que entraña la movilización de vehículos automotores para la satisfacción del aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo...' (cas. civ. sentencia número 021 de febrero de 1992) debe responder por los daños causados, dado que 'el solo hecho de estar afiliado un vehículo a determinada sociedad, implica que ésta en principio soporte alguna responsabilidad y tenga algún control sobre el vehículo' (CCXXXI, 2o volumen, 897), quedando comprendido el detrimento en la esfera o círculo de su actividad peligrosa. (CSJ SC de 17 may. 2011, rad. 2005-00345-01).

(...)

Así las cosas, para este Tribunal, tanto el señor Juan Augusto Ríos Osorio como la empresa COLDETRANS, deben responder solidariamente por el 50% en que se estima que contribuyó el conductor del vehículo tractocamión en la muerte del señor Israel Gutiérrez Valencia.

Más adelante, en la providencia censurada se indicó:

b) Llamada en garantía por parte de la empresa COLDETRANS

Conforme se indicó en el acápite de antecedentes, COLDETRANS denunció el pleito a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., aduciendo que el tractocamión implicado transportaba carga de dicha empresa y, por lo tanto, tiene calidad de solidario y civilmente responsable (fls. 209 a 211, C.I). Acotó que para el mes de los hechos, COLDETRANS nunca cargó bajo su responsabilidad el referido vehículo.

A la denuncia en pleito, el Juzgado de primera instancia le imprimió el trámite de llamamiento en garantía.

Al respecto, esta Corporación estima que en el proceso no se acreditó el derecho legal o contractual a través del cual COLDETRANS pudiera exigirle a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. que responda por la condena que aquella debe asumir de manera solidaria con el señor Juan Augusto Ríos Osorio. Lo anterior, en la medida en que, independientemente del contrato para la carga de mercancía perteneciente a la cooperativa, que además no fue allegado al expediente, lo cierto es que el vehículo tractocamión siguió estando vinculado a la empresa transportadora, lo que impide que ésta pueda exonerarse de la responsabilidad extracontractual.

⁵ Cita original de la providencia: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Sentencia SC1084-2021 del 5 de abril de 2021. Radicación número: 68001-31-03- 003-2006-00125-01.

No hay prueba alguna en el expediente que permita afirmar que el hecho que la carga que transportaba el tractocamión el día del accidente fuera propiedad de la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., implica que ésta debía asumir la responsabilidad de guardián de la actividad que el vehículo realizaba.

Recuérdese que, como se indicó anteriormente, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la empresa a la cual está afiliado el vehículo es quien tiene el control efectivo del mismo al momento de administrarlo con facultad de utilizarlo y de designar incluso al personal que lo opera, sin intervención del propietario; y que sólo cuando se demuestre que la empresa no tiene dicho control del automotor, entrarían a responder solidariamente el propietario, quien contrató y el conductor, por las obligaciones que surjan del contrato de transporte, conforme al artículo 991 del Código de Comercio. En este caso, se repite, COLDETRANS no acreditó que no tuviera el control efectivo del vehículo.

Bajo ese entendimiento, esta Sala de Decisión declarará probada la excepción formulada por la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. y que denominó: "INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD"; absteniéndose entonces de resolver sobre los demás medios exceptivos propuestos por la llamada en garantía.

Obsérvese que el Tribunal Administrativo de Caldas analizó con detalle no sólo la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo, sino también de la empresa aquí accionante, COLDETRANS S.A., y realizó un estudio pormenorizado de las razones por las cuales no aceptó el llamamiento en garantía de la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., del cual no es posible inferir, como se hace en la solicitud de amparo, que la corporación judicial accionada ignoró el manifiesto de carga. Por el contrario, lo que se entiende es que el Tribunal en todo momento parte del hecho cierto de que la carga era propiedad de la Cooperativa, pero con fundamento en la orientación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, concluyó que, más allá de eso, lo determinante para endilgar la responsabilidad era conocer la empresa a la que se encontraba vinculado o afiliado el tractocamión.

A esto se suma que el Tribunal señaló que no se aportó el contrato de transporte, mas no el manifiesto aludido, que es diferente. Además, tampoco se allegó un contrato de vinculación o cualquier otro documento que acredite que el vehículo de estaba vinculado o afiliado ya fuera temporal o de manera permanente a la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda.⁶; en su lugar, el Tribunal acudió a

⁶ «En efecto, el manifiesto de carga, conforme lo prevé el mismo Decreto 173 de 2001 que se impugna, es “el documento que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades, por lo tanto, debe ser portado por el conductor del vehículo durante todo el recorrido. Se utilizará para llevar las estadísticas del transporte público de carga por carretera dentro del territorio nacional” (artículo 7), lo cual acredita sin duda el contrato de transporte y es útil para detallar las mercancías que se movilizan, pero de ninguna manera puede entenderse que dicho documento reemplaza al contrato de vinculación, que como se vio, se torna en indispensable para regular las relaciones entre el propietario del vehículo y la empresa de transporte cuando aquél no hace parte del parque automotor registrado por la empresa respectiva». (Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, Rad. No. 11001 0324 000 2012 00159 00, Sentencia del 19 de octubre de 2018).

las afirmaciones realizadas en la demanda y aceptadas por COLDETRANS S.A. en la contestación, según las cuales el automotor se encontraba vinculado a esta última empresa, sin que dicha apreciación se haya desvirtuado por otros medios de prueba.

De otra parte, la accionante adujo que en la providencia censurada se valoró indebidamente el informe de accidentes, habida consideración de que desconoció que el retén de policía no cumplía las exigencias mínimas de seguridad, y no se percató de que la víctima fatal conducía su moto con exceso de velocidad. Sobre el particular, el Tribunal accionado señaló:

La Sala observa que la ausencia de una reglamentación general expresa en materia de requisitos para la instalación de puestos de control, en contraste con la facultad que tienen los organismos de tránsito para organizar y dirigir lo relacionado con el tránsito y transporte en su respectiva jurisdicción (artículos 2 y 6 del Código Nacional de Tránsito), conduce a esta Sala de Decisión a inferir que la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Caldas tenía competencia para establecer a través de manuales internos, las directrices para llevar a cabo las actividades propias de un puesto de control, tal como lo hizo en el procedimiento que obra en el expediente y que se mencionó en el acápite de hechos acreditados precisado en estas consideraciones. (...)

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta el análisis realizado en el acápite de hechos probados en relación con los requisitos mínimos para la instalación de un puesto de control, esta Sala de Decisión advierte de manera evidente que la Policía Nacional, en efecto, desatendió el procedimiento previsto, en tanto:

- No expidió previamente orden de servicios para realizar el puesto de control.*
- No se asignaron las unidades policiales requeridas para la mencionada actividad y atendiendo la zona rural de la que se trataba y que exigía un mínimo de 10 policías.*
- Excedió el límite de dos (2) horas previsto para realizar puesto de control en una misma zona.*
- El puesto de control no fue ubicado en un lugar apropiado, en tanto se instaló no sólo cerca de una curva pronunciada, sino además ocupando parte de uno de los carriles sin usar la señalización adecuada, sin contar con policías asignados a manejar la señal de pare o siga, y a conducir el tránsito vehicular durante el tiempo que permanecieran en el sector. Lo anterior, con el fin de evitar congestión vehicular, así como riesgo para los conductores o peatones.*
- Los vehículos seleccionados para el registro y control no se limitaron a aquellos que pudieran atender dadas las circunstancias antes referidas, esto es, número de policiales a cargo, ubicación del puesto de control y ausencia de señalización correspondiente, sin generar o incrementar riesgos para quienes transitaran por el lugar.*
- No se dispusieron policiales a cargo de la seguridad y de la apertura a 50 o 100 metros de la entrada a dicho retén, como se señala en el esquema de cómo debe instalarse un puesto de control.*

Tal como ha tenido oportunidad de señalarlo el Consejo de Estado, “[...] el servicio policial debe prestarse con estricta aplicación al principio de planeación y, por tanto, los comandantes de la institución se encuentran obligados a planear y distribuir los servicios teniendo en cuenta las características del grupo a su mando, para prevenir y contrarrestar las diversas situaciones que atentan contra la seguridad y bienestar de la comunidad, mantener y defender el orden público, garantizando, a su vez, la vida, integridad y seguridad de los miembros de la fuerza pública, con ocasión de la prestación del servicio. [...]” Y nótese cómo en el presente asunto la entidad demandada no efectuó los planes de prevención necesarios para minimizar los riesgos derivados del acto propio del servicio que estaba desarrollando.

Todo lo anterior constituye una evidente falla en el servicio por parte de la Policía Nacional.

De la lectura del aparte transcrito, emerge con claridad que el Tribunal Administrativo de Caldas analizó detenidamente este punto de debate y llegó a la conclusión de que existió una falla del servicio por parte de la Policía Nacional y es por ello que le endilgó parcialmente la responsabilidad por el accidente, razón por la cual la Sala encuentra que el argumento esgrimido en la solicitud de amparo sí fue analizado en el fallo reprochado, y por ende, traer a este escenario nuevamente la discusión implica convertir la acción de tutela en una instancia adicional.

Distinto es que la autoridad judicial hubiera considerado que el conductor del vehículo automotor también tuvo responsabilidad en el accidente, cuestión que analizó en detalle y en el marco de la competencia que le confirió el recurso de apelación incoado por la Policía Nacional. Así razonó la corporación judicial accionada:

En relación con la responsabilidad del vehículo tipo tractocamión que se vio implicado en el accidente, el Tribunal advierte que el conductor del mismo incurrió en infracciones comprobadas al Código Nacional de Tránsito, pues realizó una maniobra de adelantamiento de vehículos no sólo en un tramo de la vía en donde existía línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento, sino también cerca de una curva, siendo desfavorable por ello la visibilidad y ofreciendo peligro para quienes transitaran por el carril contrario. Lo anterior, en abierta contradicción con las prohibiciones previstas por el artículo 73 de la Ley 769 de 2002: (...)

El artículo 131 de la Ley 759 de 2002 contempla expresamente sanciones para el conductor y/o propietario de un automotor que incurra en las infracciones relativas a adelantar a otro vehículo en curva, así como la de conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas.

Aun cuando esta Corporación no desconoce que las circunstancias en las cuales se instaló el puesto de control por parte de la Policía Nacional incidieron de una u otra manera en la comisión de las infracciones antes referidas, lo cierto es que tampoco puede pasar por alto que el conductor del vehículo obró imprudentemente, pues decidió motu proprio continuar su trayecto invadiendo

para ello el carril contrario, no sólo sin esperar alguna señal de los uniformados o que los vehículos que habían sido detenidos para registro y control avanzaran, sino también sin cerciorarse que contaba con espacio suficiente para nuevamente devolverse a su carril que no venía otro vehículo, pese a que, según consta en su declaración, observó que el retén se encontraba muy cerca de la curva.

La existencia del puesto de control, con las escasas señales usadas y que incluso fueron advertidas por el mismo conductor del tractocamión al llegar al sector, exigía de parte de éste que tomara las precauciones del caso, realizando las maniobras necesarias para continuar por su ruta sin atentar contra su propia seguridad, la del resto de los vehículos y la de los peatones.

Nótese que el Tribunal es enfático al determinar la responsabilidad de la Policía en el accidente, por tanto, no es de recibo la afirmación realizada en la solicitud de amparo, encaminada a señalar que la autoridad judicial desconoció tal situación; sin embargo, en la providencia también se atribuyó responsabilidad al conductor del automotor, como se analizó.

Ahora bien, sobre la afirmación realizada por el libelista, relacionada con que la víctima fatal conducía su moto con exceso de velocidad, en el fallo censurado se expresó que *«la supuesta culpa de la víctima en su deceso no habrá de ser analizada en esta instancia, como quiera que así no lo solicitó la Policía Nacional en su recurso de apelación. No obstante lo anterior, la Sala deja constancia de que no existe ningún elemento material probatorio a través del cual se acredite que el señor Israel Gutiérrez Valencia transitaba a alta velocidad en su motocicleta o desconociendo alguna de las normas de tránsito, con lo cual hubiera contribuido al daño o incluso provocarlo»*. De allí se colige que, pese a no hacer mayores disertaciones sobre el asunto —por no ser del resorte de la apelación—, la corporación accionada descartó de cierto modo que la víctima condujera con exceso de velocidad o violando normas de tránsito, razón por la cual no tiene caso reabrir la discusión en torno a ello, menos aún en esta acción de stirpe constitucional.

Bajo las consideraciones que anteceden, para la Sala es evidente que los argumentos alegados en la tutela fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido por la autoridad judicial demandada. Es claro que la presente solicitud de amparo deviene en improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso ordinario, en torno a la responsabilidad solidaria de la Nación – Policía Nacional, el señor Juan Augusto Ríos Osorio (propietario del automotor) y COLDETRANS S.A. en el accidente de tránsito ocurrido el 12 de junio de 2013, en el que falleció el señor Israel Gutiérrez Valencia.

En lo que atañe al argumento de indebida valoración de la póliza emitida por de Allianz S.A., al igual que el *a quo*, la Sala concuerda con lo dicho por la propia aseguradora en la contestación a la tutela, quien no advirtió anomalía alguna, pues, aunque en la parte considerativa se incurrió en un yerro al referir un deducible por valor de \$1.100.000.000, lo cierto es que se trató de un error mecanográfico y, en todo caso, en la parte resolutive se condenó a la aseguradora *«[a] que con cargo a la póliza de autos no. 021226541/41 suplemento 1, y teniendo en cuenta en todo caso el límite del valor asegurado, así como el deducible que el asegurado deba pagar por dicho concepto, asuma la condena impuesta de manera solidaria contra el señor Juan Augusto Ríos Osorio»*.

En suma, la solicitud de amparo deviene en improcedente, por incumplimiento de la exigencia de relevancia constitucional, toda vez que, respecto de los defectos sustantivo, procedimental y el error inducido, COLDETRANS S.A. no cumplió con la carga argumentativa, y frente al defecto fáctico es evidente que busca revivir la discusión planteada, como si la acción de tutela fuera una instancia adicional del proceso ordinario, cuestiones que, en todo caso, ya fueron analizadas y decididas en la providencia proferida el 26 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Por todo lo anterior, la Sala modificará la decisión impugnada, para declarar improcedente la acción de tutela respecto de todos los defectos alegados, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Modificar la sentencia del 17 de mayo de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, la cual quedará así:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la Compañía Colombiana de Transportes - COLDETRANS S.A., de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, **envíese** el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

<p>Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:</p> <p>https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/validador.aspx.</p>	
--	---



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 17 de mayo de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06588-00

Demandante: Coldetrans SA

Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas

Referencia: Acción de tutela. Primera Instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto fáctico - se niega

Síntesis del caso: La sociedad demandante enjuició la sentencia que, dentro de un proceso de reparación directa, la declaró solidariamente responsable del 50% de los perjuicios reconocidos por la muerte de un motociclista que chocó con un tractocamión. A su juicio, la autoridad judicial que profirió dicha decisión dejó de valorar ciertas pruebas.

De acuerdo con la competencia asignada¹, procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Coldetrans SA en contra del Tribunal Administrativo de Caldas.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 9 de diciembre de 2022, Coldetrans SA, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, (defensa y contradicción), el derecho de igualdad, así como también de los principios constitucionales de confianza legítima y buena fe, con ocasión de la Sentencia de 26 de agosto de 2022, proferida dentro del proceso de reparación directa No. 17001-33-33-004-2014-00566-00/02.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se transcribe):

“1. TUTELAR los derechos de COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, al Debido Proceso, el Derecho de Defensa y Contradicción, el Derecho de Igualdad (procesal) y los principios de Confianza legítima y el de

¹ Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.

Buena Fe y deber de imparcialidad del juez para el trámite del mismo y análisis integral del expediente, de los que es titular COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, quebrantados por Sala Quinta de decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, en el fallo de fecha veintiséis (26) de Agosto de dos mil veintidós (2022) mediante el Accionado, modifíco el fallo de primera instancia y profirió condena en contra de COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, sin que esta tuviera responsabilidad alguna en el evento que origina la demanda, limita la responsabilidad de la demandada POLICIA NACIONAL AL 50%, exonerando además a la empresa de transporte terrestre automotor de carreta que tenía la vinculación temporal del vehículo de placas TTG200, desconociendo la prueba irrefutable de la responsabilidad de empresa de transporte COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, y finalmente establece un deducible frente a la póliza de ALLIANZ (llamada en garantía) superior a lo que establecido en la póliza de autos No. 021226541/41, dentro del proceso acción de Reparación Directa, bajo radicado con número de radicado 17001333300420140056600 tramitado contra COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A, y otros.

2. En consecuencia, se pretende mediante esta tutela como instrumento excepcional y residual, revocar y/o modificar las decisiones proferidas en segunda instancia por Sala Quinta de decisión, integrada por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas, AUGUSTO RAMON CHÁVEZ MARÍN, MARTIN ANDRES PATIÑO MEJIA Y CARLOS MANUEL ZAPATA JAIMES y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, que resolvió el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia dentro del proceso ya referenciado.

3. Se garanticen los derechos fundamentales conculcados a la demandada COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A. y se profiera el fallo o fallos sustitutivos a que haya lugar que reestablezcan y salvaguarden los derechos fundamentales conculcados a COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A y corrija las vías de hecho y los defectos fácticos expuestos y explicados.

4. Se tomen las demás medidas que sean idóneas para la protección integral de los derechos fundamentales de COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE COLDETRANS S.A.”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se destacan los siguientes:

4. 1) El 11 de junio de 2013, la Cooperativa Quindiana de Transportes Ltda. emitió el manifiesto de carga No. 9651957 para que el vehículo tipo “tractocamión” con placas TTG200, de propiedad de Juan Augusto Ríos y afiliado a Coldetrans SA, transportara una mercancía de Buenaventura (Valle del Cauca) a Supía (Caldas).

5. 2) El 12 de junio de 2013, la Policía Nacional instaló un retén en el kilómetro 31 de la vía Cauyá – La Pintada, de doble sentido, en el municipio de Riosucio – Caldas. El conductor del vehículo de placas TTG200 se encontró con dicho retén y, presuntamente, ante la falta de instrucción de “pare” y con el fin de esquivar los carros que estaban detenidos, procedió a invadir el carril contrario, y, mientras avanzaba, Israel Gutiérrez Valencia, quien conducía una motocicleta, chocó con el tractocamión, lo cual ocasionó su muerte.

6. 3) Con ocasión de lo anterior, el 20 de octubre de 2014, el grupo familiar de Israel Gutiérrez Valencia demandó, en ejercicio del medio de control de reparación directa, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a Coldetrans SA y al propietario del vehículo de placas TTG200, Juan Augusto Ríos, con el fin de que les repararan los perjuicios causados con la muerte del señor Gutiérrez Valencia.

7. 4) El 5 de diciembre de 2019, el Juzgado 3 Administrativo de Manizales profirió sentencia de primera instancia y condenó, como única responsable, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a resarcir los perjuicios ocasionados, tras concluir que la muerte del señor Gutiérrez Valencia fue consecuencia de la inobservancia de las respectivas medidas de seguridad en la instalación del retén. En esa medida, negó las pretensiones dirigidas contra Coldetrans SA y Juan Augusto Ríos Osorio, por prosperar la excepción de hecho de un tercero, y concluyó que, por lo anterior, quedaba sin piso jurídico el llamamiento en garantía realizado respecto de Allianz Seguros SA y la Cooperativa Quindiana de Transporte Ltda.

8. 5) La anterior decisión fue apelada por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, bajo el argumento de que la instalación del retén no tuvo ninguna incidencia en el resultado y que, por el contrario, lo que produjo la muerte del señor Gutiérrez Valencia fue el actuar imprudente de quien conducía el vehículo de placas TTG200 porque (se transcribe) *“no solo no obedeció la norma frente a la prohibición de adelantar en doble línea [a pocos metros de una curva], sino que esquivó el puesto de control desobedeciendo y haciendo caso omiso a la señal de precaución y de cierre que representaba el cono”*.

9. 6) El 26 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia de segunda instancia y dispuso modificar la decisión apelada, al considerar que el proceder de quien conducía el vehículo de placa TTG200 sí había sido imprudente y, como consecuencia, había causado el resultado de manera concurrente. En ese sentido, declaró que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional era responsable del 50% de los perjuicios reconocidos por haber instalado un puesto de control sin los requisitos mínimos ni el procedimiento correspondiente², y que Coldetrans SA y Juan Augusto Ríos³ también lo eran, solidariamente, del 50% restante, porque el

² Al respecto determinó (se transcribe) *“De lo anterior se dejó constancia únicamente en el libro de guardia (fls. 165 a 168, C.I.), esto es, no se expidió previamente orden de servicios para realizar tal actividad. Pese a lo establecido en el procedimiento correspondiente y teniendo en cuenta que se trataba de una zona rural, las unidades policiales asignadas no fueron las necesarias, esto es, 10 policías. En relación con la ubicación del puesto de control, sólo consta en el expediente que el mismo se instaló en una recta, seguida de una curva pronunciada que se hallaba más o menos a media cuadra o a 50 metros. Quedó demostrado igualmente en el proceso que el citado puesto de control se ubicó en parte del carril que conducía de Anserma a Riosucio, para lo cual se usaron como señales únicamente dos conos a lado y lado. Ninguno de los policías que integraban el puesto de control fue asignado a manejar señal de pare o siga, y tampoco a conducir el tránsito vehicular durante el tiempo que permanecieron en el sector.*

³ En lo que a él atañe, el tribunal resolvió (se transcribe) **“Quinto. MODIFÍCASE** el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así: **CONDÉNASE** a Allianz Seguros a que con cargo a la póliza de autos

tractocamión incurrió en una infracción de tránsito al ocupar en contravía, sobre una curva cerrada, el carril por el que se movilizaba la víctima.

10. Como fundamento de la vulneración, el accionante alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en *defecto fáctico* por desconocer el manifiesto de carga No. 9651957 de 11 de junio de 2013⁴, expedido por la Cooperativa Quindiana de Transportadores, y del cual, a su juicio, se podía determinar que el vehículo de placas TTG200 tenía una vinculación temporal con esta última cooperativa y no con Coldetrans SA, por lo que, de conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.1.7.4.4. del Decreto 1079 de 2015⁵, la primera asumió la guarda, vigilancia y responsabilidad del vehículo al momento de los hechos, por haber emitido el manifiesto de carga en cuestión. Precisó que, si bien, el tribunal refirió una afiliación, la misma no comprendía la vinculación⁶.

11. Asimismo, alegó la indebida valoración de (1) la póliza de Allianz Seguros SA que tenía un deducible pactado de \$1.100.000, pero que el tribunal demandado lo estableció en \$1.100.000.000; (2) el informe de accidentes, los testimonios y el material probatorio pues, según mencionó, el Tribunal Administrativo de Caldas omitió el hecho de que el fallecido desplegaba una actividad peligrosa y transitaba con exceso de velocidad, razón por la cual es imperativo concluir que este participó en la configuración del resultado, además de que la Policía Nacional fue la única responsable de lo ocurrido, por la instalación de un retén (se transcribe) “*sin señalización adecuada ni personal suficiente*”.

12. Por otro lado, sostuvo que el defecto fáctico alegado también se materializaba porque se tuvo como probados los perjuicios materiales de lucro cesante y el perjuicio moral sin que haya prueba suficiente de su carácter cierto e intensidad para fijar su reconocimiento y, además, se omitió la práctica y decreto de pruebas de oficio.

1.2. Posición de la parte demandada y terceros⁷

n021226541/41 suplemento 1, y teniendo en cuenta en todo caso el límite del valor asegurado, así como el deducible que el asegurado deba pagar por dicho concepto, asuma la condena impuesta de manera solidaria contra el señor Juan Augusto Ríos Osorio.

⁴ Prueba que según indicó se incorporó en la audiencia de pruebas No. 198 de 20 de septiembre de 2017.

⁵ “ARTÍCULO 2.2.1.7.4.4. Contrato de vinculación. (...)”

PARÁGRAFO. Las empresas de Transporte Público y los propietarios de los vehículos podrán vincular los equipos transitoriamente para la movilización de la carga, bajo la responsabilidad de la empresa que expide el manifiesto de carga”.

⁶ Al respecto indicó que (se transcribe) “*la afiliación de los vehículos de carga se realizó antaño, en vigencia del decreto 173 de 2001, que exigía la emisión del Registro nacional de transporte de transporte para la matrícula del vehículo (artículo 24, 25, 26), disposiciones derogadas por el decreto 1499 de 2009*”.

⁷ Mediante Auto de 13 de diciembre de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como demandado al Tribunal Administrativo de Caldas, y (3) vincular al Juzgado 3 Administrativo de Manizales, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a la parte demandante del proceso ordinario (Omaira Guerrero Largo, Arsoman Gutiérrez Navarrete, Bertilda Rosa Valencia, Álvaro Antonio Fernando, Otoniel y Uber Gutiérrez Valencia), como terceros con interés en el asunto.

Adicionalmente, a través de Auto de 14 de marzo de 2023, el despacho ordenó también vincular a Allianz Seguros SA, como tercero interesado en el proceso.

13. El Tribunal Administrativo de Caldas manifestó que la providencia enjuiciada fue emitida con plena observancia de los derechos y garantías que aseguraron a las partes la igualdad procesal y una decisión imparcial y debidamente motivada. Además, mencionó que el fundamento de la vulneración tenía relación directa con la valoración probatoria que fue realizada al interior del proceso ordinario, de modo que toda inconformidad en relación con dicho aspecto debió presentarse y discutirse allí y no a través de la acción de tutela como una instancia adicional de lo que ya había decidido el juez natural.

14. El Juzgado 3 Administrativo de Manizales alegó que la acción de tutela presentada carecía de sustento jurídico y fáctico, ya que a través de esta se pretendía revivir el debate probatorio que fue resuelto por las autoridades judiciales competentes en el trámite ordinario.

15. La Policía Nacional solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela por la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante, ya que el vehículo tractocamión, para ese entonces, estaba afiliado a Coldetrans SA. Además, adujo que no existía un perjuicio irremediable que hiciera procedente la tutela, máxime cuando lo pretendido se había debatido a través de las vías judiciales idóneas.

16. Allianz Seguros SA señaló que su pronunciamiento estaría limitado a la supuesta configuración de un defecto fáctico por indebido análisis de la póliza de seguro, en relación con lo cual manifestó que se trataba de un simple error de digitación que no tenía relevancia alguna, de cara a los derechos fundamentales del accionante, toda vez que, de la lectura de la sentencia, se podía inferir que el deducible reconocido no superaba el monto a pagar. En ese orden, señaló que para cumplir el numeral quinto de la parte resolutive de la providencia⁸ debía observarse el contenido de la póliza sobre la cual se sustentaba.

17. En todo caso, consideró que a Coldetrans SA no le asistía ningún interés en la decisión tomada frente a Allianz SA, por no ser parte del contrato de seguro ni beneficiaria de la prestación asegurada. Así las cosas, adujo que ningún vínculo legal o contractual obligaba a Allianz a soportar la condena impuesta a dicha sociedad.

18. Los demás vinculados guardaron silencio.

⁸ **“Quinto. MODIFÍCASE el ordinal cuarto** de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así: **CONDÉNASE** a Allianz Seguros a que con cargo a la póliza de autos n° 021226541/41 suplemento 1, y teniendo en cuenta en todo caso el límite del valor asegurado, así como el deducible que el asegurado deba pagar por dicho concepto, asuma la condena impuesta de manera solidaria contra el señor Juan Augusto Ríos Osorio.”

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de defectos y objeto de estudio. 2.2 Fijación de la controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de defectos y/o vulneración alegada. 2.5. Conclusión.

2.1. Identificación de defectos y objeto de estudio

19. Aunque la sociedad accionante también alegó la configuración de un defecto fáctico por indebida valoración de testimonios y otros elementos probatorios, la Sala observó que no aludió de manera expresa, ni individualizó los testimonios u otro tipo de elementos que, supuestamente, fueron valorados de manera indebida, situación que imposibilita cualquier estudio al respecto.

20. De igual forma ocurrió con los cargos: 1) haberse tenido como probados los perjuicios materiales de lucro cesante y el perjuicio moral sin prueba suficiente de su carácter cierto e intensidad para su reconocimiento, y 2) haberse omitido la práctica y decreto de pruebas de oficio, pues, la Sala advirtió que la sociedad accionante se limitó a mencionarlos, pero no desarrolló ninguno de los 2 reproches en cuestión frente al estudio probatorio del caso, sino que fueron simples afirmaciones o manifestación de inconformidad sin respaldo alguno. Por tal motivo, la Sala también se sustraerá de su análisis.

21. En consecuencia, se realizará un estudio del defecto fáctico en cuestión, pero, únicamente, a la luz de los elementos probatorios que sí fueron individualizados: el manifiesto de carga, el informe de accidentes y la póliza de seguro. Precizando que, aunque la parte actora aludió a la inobservancia de una norma - parágrafo del artículo 2.2.1.7.4.4 del Decreto 1079 de 2015 –, tal reparo no se analizará a la luz de un eventual defecto sustantivo, sino bajo el mismo defecto fáctico, por referirse al valor que debía dársele al supuesto de hecho de la norma.

2.2. Fijación de la controversia

22. Determinar, luego de verificados los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, si el Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en un defecto fáctico por la indebida valoración de 1) el manifiesto de carga No. 9651957 de 11 de junio de 2013, a la luz del parágrafo del artículo 2.2.1.7.4.4 del Decreto 1079 de 2015, 2) la póliza de seguro No. 021226541/41 y 3) el informe de accidentes de la Policía Nacional.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial⁹

23. La Sala encuentran satisfechos los requisitos generales de: subsidiariedad, toda vez que no existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la providencia enjuiciada (29/8/22)¹⁰ y la de interposición de la presente acción de tutela (9/12/22). No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia está relacionada con una sentencia de segunda instancia dictada en el marco de un proceso de reparación directa. Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación de derechos fundamentales de la entidad demandante en el marco de un proceso de reparación directa, con ocasión de una providencia de segunda instancia respecto de la cual se alegó la configuración un defecto fáctico. Aunado a ello, no se observa que se trate de la reiteración de argumentos esgrimidos en el proceso de reparación directa o que se haya pretendido llevar a una instancia adicional el pleito.

2.4. Verificación de defectos y/o vulneración alegada

24. En el presente caso, la Sala negará al amparo solicitado, tras verificar que en la providencia enjuiciada no se configuró el defecto fáctico alegado, por las siguientes razones:

25. (1) La sociedad accionante alegó que el Tribunal Administrativo de Caldas, en la Sentencia de 26 de agosto de 2022, desconoció el manifiesto de carga No. 9651957 de 11 de junio de 2013, del cual, a su juicio, se podía determinar que el vehículo de placas TTG200 tenía una vinculación temporal con esta última cooperativa y no con Coldetrans SA, de conformidad con el parágrafo del artículo 2.2.1.7.4.4. del Decreto 1079 de 2015.

26. Habida cuenta de lo anterior, la Sala destaca que, en la Sentencia de 26 de agosto de 2022, la autoridad judicial demandada determinó (se transcribe):

“b) Llamada en garantía por parte de la empresa COLDETRANS (...)

Al respecto, esta Corporación estima que en el proceso no se acreditó el derecho legal o contractual a través del cual COLDETRANS pudiera exigirle a la

⁹ El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-66 de 2019.

¹⁰ Al consultar el expediente de reparación directa allegado al presente proceso, se constató que el mensaje de datos fue enviado el 29 de agosto de 2022. Ver cuaderno 5, folios 53 y 54.

Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. que responda por la condena que aquella debe asumir de manera solidaria con el señor Juan Augusto Ríos Osorio. Lo anterior, en la medida en que, independientemente del contrato para la carga de mercancía perteneciente a la cooperativa, que además no fue allegado al expediente, lo cierto es que el vehículo tractocamión siguió estando vinculado a la empresa transportadora, lo que impide que ésta pueda exonerarse de la responsabilidad extracontractual.

No hay prueba alguna en el expediente que permita afirmar que el hecho que la carga que transportaba el tractocamión el día del accidente fuera propiedad de la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., implica que ésta debía asumir la responsabilidad de guardián de la actividad que el vehículo realizaba.

Recuérdese que, como se indicó anteriormente, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la empresa a la cual está afiliado el vehículo es quien tiene el control efectivo del mismo al momento de administrarlo con facultad de utilizarlo y de designar incluso al personal que lo opera, sin intervención del propietario; y que sólo cuando se demuestre que la empresa no tiene dicho control del automotor, entrarían a responder solidariamente el propietario, quien contrató y el conductor, por las obligaciones que surjan del contrato de transporte, conforme al artículo 991 del Código de Comercio. En este caso, se repite, COLDETRANS no acreditó que no tuviera el control efectivo del vehículo.

Bajo ese entendimiento, esta Sala de Decisión declarará probada la excepción formulada por la Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda. y que denominó: "INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD"; absteniéndose entonces de resolver sobre los demás medios exceptivos propuestos por la llamada en garantía.¹¹ (Se resalta)"

27. De lo transcrito, la Sala observa que, aunque la autoridad judicial demandada, al analizar el llamamiento en garantía por parte de Coldentrans SA, no hizo alusión expresa al manifiesto de carga No. 9651957 de 11 de junio de 2013, el cual fue decretado e incorporado como prueba¹², ello no implica que haya incurrido en un defecto fáctico capaz de cambiar la decisión, pues, lo relevante no era determinar de quién era la carga, sino a qué empresa estaba vinculado el tractocamión, en esa medida el Tribunal Administrativo de Caldas indicó que (se transcribe) "*independientemente del contrato para la carga de mercancía perteneciente a la cooperativa, lo cierto es que el vehículo siguió estando vinculado a la empresa transportadora*" (Coldetrans SA), la cual, a su vez, tampoco acreditó que no tuviera control sobre este.

28. Además, el hecho de que Coldetrans SA cuestione, bajo el título de un defecto fáctico, la ausencia de su responsabilidad en los hechos, aduciendo que, con fundamento en el manifiesto de carga y el párrafo del artículo 2.2.1.7.4.4 del Decreto 1079 de 2015, se podía establecer que el tractocamión tenía una vinculación temporal con la Cooperativa Quindiana de Transportes Ltda., no configura tal defecto, pues, la Sala

¹¹ Extracto tomado de los folios 50 y 51 del cuaderno 5 que obra en el expediente digital ordinario allegado (ver índice 16 de SAMAI).

¹² Ver folio 373 del cuaderno 1A que obra en el expediente digital ordinario allegado (ver índice 16 de SAMAI).

identificó una providencia en la que la Sección Primera del Consejo de Estado, al analizar el parágrafo 22 del Decreto 173 de 2001, reiterado en el artículo 2.2.1.7.4.4 del Decreto 1079 de 2015, determinó (se transcribe):

*"En efecto, el manifiesto de carga, conforme lo prevé el mismo Decreto 173 de 2001 que se impugna, (...) acredita sin duda el contrato de transporte y es útil para detallar las mercancías que se movilizan, pero de ninguna manera puede entenderse que dicho documento reemplaza al contrato de vinculación, que como se vio, se torna en indispensable para regular las relaciones entre el propietario del vehículo y la empresa de transporte cuando aquél no hace parte del parque automotor registrado por la empresa respectiva.
(...)"*

La anterior circunstancia lleva a la Sala a negar las pretensiones de la demanda, en cuanto que el parágrafo del artículo 22 del Decreto 173 de 2001 expedido por el Presidente de la República, en manera alguna habilita a la empresa de transporte a prestar el servicio de transporte terrestre automotor de carga de manera transitoria con vehículos de terceros sin que medie contrato de vinculación, no siendo suficiente el porte del manifiesto de carga para esos mismos efectos.¹³"

29. Por consiguiente, para la Sala resulta evidente que la norma aludida no determina ningún referente o valor probatorio preestablecido, en relación con el manifiesto de carga, pues se limita a enunciar una figura contractual y a establecer la posibilidad de que, en su desarrollo, se asigne responsabilidad a una de las partes. De ese modo, salta a la vista que el efecto perseguido por el accionante solo podría ser el resultado de 2 condiciones concurrentes: a) la existencia del contrato de vinculación, y b) la asunción de responsabilidad por parte de quien expidió el manifiesto de carga, las cuales no se dieron en su caso.

30. 2) En lo que tiene que ver con el cargo de indebida valoración probatoria, la Sala tampoco advierte la configuración del defecto fáctico alegado, en la medida que: (a) respecto de la póliza de seguro No. 021226541/41, la Sala evidenció que el tribunal demandado señaló el valor del deducible de \$1.100.000.000, únicamente, en la parte motiva de su providencia, pues en la parte resolutive no lo hizo¹⁴ y, por ende, no se advierte una indebida valoración de dicho documento y, mucho menos, vulneración alguna a los derechos fundamentales de Coldetrans SA, máxime cuando las partes del contrato de seguro fueron Juan Augusto Ríos Osorio y Allianz Seguros SA y a ellos concernía tal aspecto.

31. (b) En relación con el informe de accidentes de la Policía Nacional, la Sala observó que este no daba cuenta de la situación que, a juicio de la parte actora, fue omitida por el tribunal, a saber, que la víctima transitaba

¹³ Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 19 de octubre de 2018, radicado No. 11001-03-24-000-2012-00159-00.

¹⁴ "Quinto. MODIFÍCASE el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia, el cual quedará así: CONDÉNASE a Allianz Seguros a que con cargo a la póliza de autos n021226541/41 suplemento 1, y teniendo en cuenta en todo caso el límite del valor asegurado, así como el deducible que el asegurado deba pagar por dicho concepto, asuma la condena impuesta de manera solidaria contra el señor Juan Augusto Ríos Osorio".

con exceso de velocidad, pues, en ninguna parte del documento aparece alguna anotación al respecto¹⁵.

32. Precisamente, de la falta de prueba del exceso de velocidad dieron cuenta tanto el Juzgado 3 Administrativo de Manizales, que estableció (se transcribe) *“la excepción de culpa exclusiva y determinante de la víctima, (...) no está llamada a prosperar, en la medida en que no fue probada por ningún medio por parte de la Policía Nacional¹⁶”*, como el Tribunal Administrativo de Caldas, al indicar que (se transcribe):

“(...) la supuesta culpa de la víctima en su deceso no habrá de ser analizada en esta instancia, comoquiera que así no lo solicitó la Policía Nacional en su recurso de apelación. No obstante lo anterior, la Sala deja constancia de que no existe ningún elemento material probatorio a través del cual se acredite que el señor Israel Gutiérrez Valencia transitaba a alta velocidad en su motocicleta o desconociendo alguna de las normas de tránsito, con lo cual hubiera contribuido al daño o incluso provocarlo”.

33. Así las cosas, no se observó una indebida valoración del informe de accidentes de la Policía Nacional, cuando ese documento no evidenciaba lo que la parte actora alegó, sino algo diferente¹⁷.

2.5. Conclusión

34. Al no configurarse el defecto alegado por la parte actora, la Sala negará las súplicas de la tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Coldetrans SA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier

¹⁵ Al revisar el documento que obra en los folios 73 y 74 del cuaderno 1 del expediente digital ordinario allegado (ver índice 16 de SAMAI), la Sala evidenció que contenía el croquis del accidente y la siguiente observación (se transcribe) *“había un puesto de control aproximadamente a 50 mts del lugar de los hechos, puesto de control PONAL SETRA-DECAL UNIR 21.2”*, aspectos que, a su vez, fueron referenciados en sentencias del proceso de reparación directa (ver folio 446 reverso del cuaderno 1b y 38 del cuaderno 5 del expediente digital ordinario allegado (ver índice 16 de SAMAI).

¹⁶ Folio 450 del cuaderno 1B del expediente digital ordinario allegado (ver índice 16 de SAMAI).

¹⁷ Ver pie de página 15 de esta providencia.

recurso y/o solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin¹⁸.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia **REMITIR** el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, **PUBLICAR** la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE

Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

¹⁸ secgeneral@consejodeestado.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES

ACTA No. 093

DE LA DILIGENCIA DE AUDIENCIA INICIAL DEL ARTICULO 180 DEL CODIGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Demandante: BERTILDA ROSA VALENCIA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL.
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A.
COLDETRANS S.A.
JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO
Radicación: 170013333004-2014-00566

En Manizales Caldas, a los quince (15) del mes de mayo de 2017, siendo las 3:15 de la tarde, la suscrita Juez Tercera Administrativa del Circuito de Manizales, en asocio con su Secretario, declara abierta la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ASISTENCIA

Se deja constancia que al iniciarse la presente audiencia se encuentran presentes las siguientes partes procesales:

Apoderado de la parte demandante: Doctor JOSÉ FERNANDO MANCERA TABARES, poderes a folios 1 a 12 C 1.
Apoderado JUAN AUGUSTO RÍOS: Doctor CARLOS ARTURO ZULUAGA CAMACHO, poder a folio 134 C1.
Apoderado NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL: Doctor CARLOS PATIÑO MORENO, poder a folio 156 C 1.
Apoderado COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES S.A. - COLDETRANS S.A., Doctor CARLOS ARTURO ZULUAGA CAMACHO, poder a folio 196 C1.
Apoderado ALLIANZ SEGUROS S.A.: Doctor LUIS FERNANDO MEJIA SERNA, poder a folio 242 C 1 A.
Apoderado COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA: Doctor JORGE LUIS CADAVID ROMERO, representante legal a folio 312 C 1 A.
PROCURADORA JUDICIAL: Doctora BIBIANA MARIA LONDOÑO VALENCIA

A continuación se procede a proferir el siguiente AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. : 586

Reconocer personería jurídica para actuar como apoderado de JUAN AUGUSTO RÍOS y de COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES S.A. - COLDETRANS S.A. al Doctor CARLOS ARTURO ZULUAGA CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.253.313 y T.P. No. 101.791. del C.S. de la J. según poder que obra a folio 134 C1; NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL. a la Doctora JEIMY ANDREA TORO FRANCO identificada con la cédula de ciudadanía No.30.234.483 y T.P. No. 179076. del C.S. de la J., y al Doctor CARLOS PATIÑO MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.261.738 y T.P. No. 101.214. del C.S. de la J. según poder que obra a folio 156 C 1; al Apoderado de ALLIANZ SEGUROS S.A., Doctor LUIS FERNANDO MEJIA SERNA, identificado con la cédula

de ciudadanía No. 10.226.383 y T.P. No. 20.063 del C.S. de la J. según poder a folio 242 C1 A; y finalmente al Doctor JORGE LUIS CADAVID ROMERO, como apoderado de la COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.535.429 y T.P. No. 96.400 del C.S. de la J. según poder a folio 242 C1 A. **DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS.**

Se interroga a los sujetos procesales si tienen alguna manifestación respecto a la providencia que se acaba de proveer, a lo que contestaron: No tener observación alguna.

SANEAMIENTO DEL PROCESO (art. 180-5 CPACA)

Previo a conceder el uso de la palabra a cada uno de los representantes judiciales de las partes, la suscrita Juez se refiere al trámite del procedimiento ordinario del presente medio de control, a efectos de verificar las etapas surtidas en desarrollo del mismo, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 180 del CPACA, de la siguiente manera:

Presentada la demanda el 20 de octubre de 2014, le corresponde conocer al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Manizales, Despacho que con providencia del 07 de mayo de 2015, admitió la demanda (fl. 117 C1), posteriormente fue asignado a este Despacho el 22 de enero del 2016 según consta a folio 228 del C1, siendo el 11 de febrero de ese mismo año, dictado auto avocando conocimiento (fl. 229 C1), y con providencia del 15 de febrero decidió el llamamiento en garantía formulado por JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO a ALLIANZ SEGUROS S.A. (fl. 233 C1), y con providencia del 28 de julio de la misma anualidad se decidió el llamamiento en garantía formulado por COLDETRANS S.A. a la COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA (fl. 304 C1 A), y luego se señaló fecha de audiencia inicial con proveído del 16 de febrero de 2017. (fl. 244 C1 A).

A continuación, se procede a conceder el uso de la palabra a cada uno de los apoderados de las partes para que manifiesten si están conformes con el trámite surtido del proceso, o si advierten nulidades e irregularidades, a lo que contestaron: No tener observación alguna

No advirtiendo la existencia de nulidades en el trámite del presente proceso, y teniendo en cuenta que esta etapa del procedimiento es preclusiva, pues no podrán alegarse las irregularidades posteriormente, se profiere el siguiente

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. : 587

Revisado el expediente no se evidencian vicios que pudieran dar lugar a adoptar medida de saneamiento alguna, toda vez que el Despacho observó las etapas del procedimiento señaladas en el CPACA y notificó las providencias proferidas en el transcurso del proceso a las partes, en la forma establecida en los artículos 171, 199 y 201 del mismo compendio procesal, y 612 del Código General del Proceso, actuación de la cual reposan en el expediente las correspondientes constancias. Por lo tanto, se hace necesario continuar con el trámite de la presente diligencia. **DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS.**

Se les interroga a las partes si tienen alguna manifestación respecto a la providencia que se ha proferido, a lo que contestaron: No tener observación alguna.

EXCEPCIONES PREVIAS (art. 180-6 CPACA)

.- El apoderado JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO, no propuso excepciones para ser consideradas en esta etapa de la diligencia.

.- El apoderado de la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, tampoco propuso excepciones para ser consideradas en esta etapa de la diligencia.

- El apoderado de COLDETRANS, no propuso excepciones para ser consideradas en esta etapa de la diligencia.

- El apoderado de ALLIANZ S.A. no propuso excepciones para ser consideradas en esta etapa de la diligencia.

- El apoderado de COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA., no propuso excepciones para ser consideradas en esta etapa de la diligencia.

FIJACIÓN DEL LITIGIO (art. 180-7 CPACA)

A continuación, procede el Despacho a señalar los hechos más relevantes a fin de fijar el litigio

- 1) El 12 de junio de 2013 en la vía Cauya – La Pintada kilómetro 31 + 950 de la Vereda la Sierra del Municipio de Riosucio – Caldas, el señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, cuando se desplazaba en una motocicleta en calidad de conductor con destino al Municipio de Quinchía - Risaralda, tuvo un accidente siendo atropellado por un tracto camión de placas TTG-200.
- 2) El señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, sufrió varias lesiones que le ocasionaron la muerte.
- 3) En la vía que se produjo el accidente metros adelante se encontraba ubicado un puesto de control de tránsito organizado por la Policía Nacional.
- 4) El vehículo involucrado en el accidente corresponde a un tracto – camión de placas TTG200 de servicio público, color naranja, y de propiedad del señor JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, siendo la empresa a la cual se encuentra registrado COLDETRANS S.A.
- 5) El informe de policial de accidentes de tránsito No. 1295533, realizado por el Agente de Tránsito ADRIÁN ESTEBAN RENDÓN, establece como características de la vía en que ocurrió el siniestro para ese momento: curva pendiente, doble sentido, una calzada, asfalto, dos carriles, estado: bueno, condiciones: seca.
- 6) El informe pericial de Necropsia practicado al señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, determina que la muerte fue violenta en accidente de tránsito causada por "trauma contundente".
- 7) Por la muerte del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, se adelanta investigación en la Fiscalía Segunda Seccional del Municipio de Riosucio – Caldas que se encuentra en etapa de indagación.
- 8) El vehículo de placas TTG200 conducido por el señor JULIÁN GONZALEZ VALENCIA, se encontraba asegurado para el 12 de junio del 2013 bajo el amparo de una póliza No. 021226541/41 de responsabilidad civil extra contractual con ALLIANZ SEGUROS S.A., con vigencia del 20 de abril de 2013 al 19 de abril de 2014.
- 9) El automotor mencionado para el 12 de junio del 2013 transportaba carga según orden de cargue de la empresa COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTES LTDA.

Acto seguido se indaga a las partes si comparte los supuestos fácticos reseñados. Sin manifestación de las partes.

A continuación se procede a fijar el litigio de la siguiente manera:

¿Es procedente declarar la responsabilidad administrativa de los demandados por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, en hechos ocurridos el día 12 de junio del 2013

en la vía Cauya - La Pintada, kilómetro 31 + 750 vereda la Sierra del Municipio de Riosucio - Caldas con fundamento en la falla del servicio?

A continuación se procede a interrogar a las partes si están de acuerdo con la fijación del litigio. Al respecto manifiestan que están conformes.

Estando conformes las partes con la fijación del litigio, se procede a continuar con la diligencia.

CONCILIACIÓN (art. 180-8 CPACA)

Acto seguido se procede a invitar a las partes a conciliar sus diferencias y presentar fórmulas de arreglo, al respecto se interroga

Apoderado JUAN AUGUSTO RÍOS Y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES S.A. - COLDETRANS S.A.: El señor Juan Augusto Ríos tenía el vehículo asegurado así que coadyuva la decisión que tome la aseguradora. Con respecto a la Compañía señala que no tienen ánimo conciliatorio.

Apoderado NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL: Manifiesta que no tiene ánimo conciliatorio da lectura al acta del comité de la Entidad, anexa la misma a un folio.

Apoderado ALLIANZ SEGUROS S.A.: El comité de siniestros de Allianz Seguros tomo la decisión de no conciliar.

Apoderado COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA: No tiene ánimo conciliatorio, señala que el llamamiento en Garantía está mal planteado.

Apoderado de la parte demandante Sin manifestación.

PROCURADORA JUDICIAL: Pide se declare fallida esta etapa y se continúe con la diligencia. (Queda consignado en CD).

AUTO DE SUSTANCIACIÓN No. : 588

No existiendo formula de arreglo alguna, el Despacho declarada fracasada esta etapa de la diligencia y procede a continuar con la audiencia. **DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS.**

Se indaga a las partes si tienen alguna manifestación al respecto. Sin manifestación de las partes.

MEDIDAS CAUTELARES (art. 180-9)

Se deja constancia que ni la parte actora ni la parte demandada solicitaron tales medidas, por lo tanto el Despacho no se pronunciará al respecto.

DECRETO DE PRUEBAS (art. 180-10)

Conforme con el numeral 10 del artículo 180 se procede al decreto de pruebas y se dicta el siguiente **AUTO INTERLOCUTORIO No. : 355**

A. PRUEBAS PARTE DEMANDANTE

Procede el Juzgado a incorporar como pruebas hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por la parte demandante al momento de la presentación de la demanda que reposan a folios 49 a 90 y 104 a 115 C1, las que serán valoradas en la sentencia.

1.- DOCUMENTALES

- a) Oficiar por Secretaría al Director del Hospital Departamental de San Juan de Dios de Riosucio - Caldas E.S.E. para que aporte en el término de 10 días el informe pericial No. 2013010117614000013 correspondiente al señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA. La parte demandante realizará las gestiones necesarias para la obtención de la prueba asumiendo el costo de las copias.

- 349
- 315
- b) Oficiar por Secretaría al Comandante de Policía del Departamento de Caldas, para que en el término de 10 días remita certificación de cuántos y cuáles eran los integrantes encargados de realizar el retén policial SETRA – DECAL UNIR 21.2. adscritos a la estación de Policía del Municipio de Riosucio para la fecha del 12 de junio de 2013 en la vía Cauya – la Pintada, en el kilómetro 31 + 750 vereda la Sierra; y finalmente copia del manual de procedimientos, protocolos, normas y esquemas atinentes a la instalación para puestos de control y/o retenes en zona rural por parte de la Policía de carreteras. La parte demandante realizará las gestiones necesarias para la obtención de la prueba asumiendo el costo de las copias.
- c) NEGAR la solicitud de copia de los libros de minuta de población, de vigilancia o documentos análogos o similares donde conste las novedades presentadas con los miembros adscritos a la Policía Nacional en el Municipio de Riosucio - Caldas correspondientes al 12 de junio de 2013, toda vez que ya reposan a folios 165 a 173 C1; así como de la copia del polígrama de las novedades presentadas el 12 de junio de 2013 y en especial del reporte del procedimiento practicado en el accidente en que falleció el señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, toda vez que el mismo ya obra a folio 174 del C1.

En relación con el expediente solicitado a la Fiscalía Segunda Seccional de Riosucio -- Caldas, de esta prueba se decidirá en el acápite de pruebas comunes.

2.- TESTIMONIAL

Decretar el testimonio de los señores:

- JOSÉ DIDIER CHIQUITO TREJOS.
- LUZ DAMARY UCHIMA GUEVARA.
- MARIA CONSUELO UTIMA RUIZ.
- OLMES DE JESÚS ARCE CARDENAS.
- LUZ MARIA CASTAÑO TREJOS.
- NULBER LONDOÑO VELASCO.
- BLANCA GLADYS CARMONA.
- EDUARDO ARTURO ROMERO GARCIA.
- ROBERTO ELIAS LEMA.
- ANGEL ALBERTO PULGARIN GIL.
- GUSTAVO ADOLFO CENDALES VARGAS.
- MANUEL DARIO POSADA SANCHEZ.
- VICTOR FRANCISCO JARAMILLO.
- RICARDO MADRID GALEANO.

En cuanto a la solicitud elevada por el apoderado de la parte demandante en relación a comisionar para la práctica de los testimonios decretados, la misma se negara conforme al artículo 171 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta el principio de inmediación de las pruebas, y que la práctica de las mismas podrá realizarse por

videoconferencia, teleconferencia o cualquier otro medio de comunicación, y solo excepcionalmente cuando no sea posible emplear los medios técnicos antes señalados.

En cuantos a los testimonios de los señores Subintendente CARLOS ALBERTO GONZALEZ LÓPEZ, Subintendente JHON JAIME OROZCO, y el patrullero ANDRÉS HURTADO MARIN y el señor Subintendente ADRIAN ESTEBAN RENDON RINCON y JULIAN GONZALEZ VALENCIA, se decidirá en el acápite de pruebas comunes.

Se le recuerda al apoderado de la parte demandante que la parte solicitante, hará comparecer a los declarantes en el día y la hora señalados.

B.- JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO

Procede el Juzgado a incorporar como pruebas hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por la parte demandada señor **JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO** al momento de la contestación de la demanda que reposan a folios 142 a 156 C1 los que serán valoradas en la sentencia.

TESTIMONIALES

En cuanto al testimonio del señor JULIAN GONZÁLEZ VALENCIA, se decidirá en el acápite de pruebas comunes.

C.- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL

Procede el Juzgado a incorporar como pruebas hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por la parte demandada **MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL** al momento de la contestación de la demanda que reposan a folios 164 a 189 C1 los que serán valoradas en la sentencia.

TESTIMONIALES

Decretar el testimonio de los señores:

- ROMAN FERNANDO FERNANDEZ RIVERA.
- JAVIER ADRIAN ACEVEDO PULGARÍN.

En cuantos a los testimonios de los señores Subintendente CARLOS ALBERTO GONZALEZ LÓPEZ, Subintendente JHON JAIME OROZCO, y el patrullero ANDRÉS HURTADO MARIN, se decidirá en el acápite de pruebas comunes.

Se le recuerda al apoderado de la parte demandada que la parte solicitante, hará comparecer a los declarantes en el día y la hora señalados.

D.- COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES S.A. "COLDETRANS S.A."

Procede el Juzgado a incorporar como pruebas hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por la parte demandada **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES S.A. "COLDETRANS S.A."** al momento de la contestación de la demanda que reposan a folios 212 a 226 C1 los que serán valoradas en la sentencia.

1) DOCUMENTAL.

Oficiar por Secretaría a la empresa **COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA**, para que aporte en el término de 10 días y remita copia de la planilla de cargue del vehículo de placa TTG200 para junio del 2013 en el trayecto que pasara por el Municipio de Riosucio - Calda. La parte solicitante realizará las gestiones necesarias para la consecución de la prueba.

2) TESTIMONIALES

350

En cuanto al testimonio del señor JULIAN GONZÁLEZ VALENCIA, se decidirá en el acápite de pruebas comunes

E.- ALLIANZ SEGUROS S.A.

Procede el Juzgado a incorporar como pruebas hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por la llamada en garantía **ALLIANZ SEGUROS S.A.** al momento de la contestación del llamamiento que reposan a folios 243 a 281 C1 A los que serán valoradas en la sentencia.

1) DOCUMENTALES

- Oficiar por Secretaría para que en el término de 10 días, **ALLIANZ SEGUROS S.A.** con sede en Bogotá, remita a este Despacho los documentos referentes a la Póliza de seguros de Automóviles "AUTOS CLONICOS PESADOS" No. 021226541/41 en la que figura como tomador y asegurado el señor JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO, así como la reclamación realizada por la ocurrencia del siniestro de tránsito ocurrido el 12 de junio de 2013, y la expedición de certificación si no se hubiere presentado reclamación alguna. La parte solicitante realizará las gestiones necesarias para la consecución de la prueba.

- **NEGAR** la prueba solicitada relacionada con la exhibición de documentos, toda vez que el documento solicitado en cuanto al seguro del señor Juan Augusto Ríos Osorio con respecto al vehículo que hizo colisión, ya reposa en el expediente a folio 142 del C1 y lo relacionados con la copia del recibo del pago de las primas, la reclamación presentada, pues esta prueba ya fue decretada en el numeral uno de esta providencia.

2) TESTIMONIALES

En cuantos a los testimonios de los señores Subintendente CARLOS ALBERTO GONZALEZ LÓPEZ, y ADRIAN ESTEBAN RENDÓN, al igual que la declaración del señor JULIAN GONZALEZ VALENCIA, se decidirá en el acápite de pruebas comunes.

3) INTERROGATORIO DE PARTE

Decretar la práctica del interrogatorio de parte de los señores: OMAIRA GUERRERO LARGO, ARSOMAN GUTIERREZ NAVARRETE, BERTILDA ROSA VALENCIA, ALVARO ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA, FERNANDO GUTIERREZ VALENCIA, OTONIEL DE JESÚS GUTIERREZ VALENCIA y UBER GUTIERREZ VALENCIA, solicitado por el apoderado de **ALLIANZ SEGUROS S.A.**

La parte solicitante, hará comparecer a los declarantes en el día y la hora señalados.

4) INSPECCIÓN OCULAR Y DICTAMEN PERICIAL

El apoderado de **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, solicita la práctica de inspección ocular y dictamen pericial del sitio de los acontecimientos a fin de determinar las características de la vía específicamente del lugar de los hechos.

El Despacho, considera innecesaria la práctica de una inspección ocular, y la intervención en la diligencia de los vehículos accidentados, pues han transcurrido más de 4 años, sin embargo señala que lo pretendido con dicha inspección puede determinarlos el dictamen pericial. Por lo tanto, el Juzgado, DECRETA, el dictamen pericial solicitado, y designa a la auxiliar de la justicia, perito ANGELA MARIA ARIAS JARAMILLO, a fin de que absuelva los interrogantes planteados a folio 302 C1 A por el apoderado de **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, el cual se anexara a la posesión del perito.

Los gastos y costos del peritaje serán asumidos por la parte solicitante.

F.- COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTES LTDA

El apoderado no solicito ni aporto prueba alguna.

G.- PRUEBAS COMUNES

1) PRUEBA TRASLADADA

Teniendo en cuenta que el apoderado de la parte demandante solicito oficiar a la FISCALÍA SEGUNDA SECCIONAL DE RIOSUCIO - CALDAS para que remita a este proceso, copia de las actuaciones surtidas dentro de la investigación radicado con No. 176146000073201300064 con ocasión del fallecimiento del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA, y el apoderado de ALLIANZ SEGUROS S.A., solicita el traslado de las pruebas que obren dentro del mismo, es por lo que el Juzgado la decretara como prueba trasladada, de la siguiente manera:

Oficiar por Secretaría a la FISCALÍA SEGUNDA SECCIONAL DE RIOSUCIO - CALDAS para que en el término de 10 días remita a este proceso, copia de las actuaciones surtidas dentro de la investigación radicado con No. 176146000073201300064 con ocasión del fallecimiento del señor ISRAEL GUTIERREZ VALENCIA. Las partes solicitantes realizarán las gestiones necesarias para la obtención de la prueba asumiendo el costo de las copias.

2) TESTIMONIALES

.Decretar el testimonio solicitado por el demandante y el MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, de los señores:

.- Subintendente JHON JAIME OROZCO

.- Patrullero ANDRÉS HURTADO MARIN

. Decretar el testimonio solicitado por el demandante, MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL y el apoderado de ALLIANZ SEGUROS S.A., al señor:

.- Subintendente CARLOS ALBERTO GONZALEZ LÓPEZ

. Decretar el testimonio solicitado por el demandante y el apoderado de ALLIANZ SEGUROS S.A, el señor:

.- Subintendente ADRIAN ESTEBAN RENDON RINCON

. Decretar el testimonio solicitado por el demandante, ALLIANZ SEGUROS S.A., el señor JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO y COLDENTRAS del señor: JULIAN GONZÁLEZ VALENCIA.

Se les recuerda a los solicitantes que harán comparecer a los declarantes en el día y la hora señalados. **DECISION NOTIFICADA EN ESTRADOS.** Se les interroga a las partes si tienen alguna manifestación respecto a la providencia que se dictó, a lo que contestaron:

Apoderado de la parte demandante: Sin manifestación.

Apoderado JUAN AUGUSTO RÍOS Y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTES S.A. - COLDETRANS S.A: Sin manifestación.

Apoderado NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL: Sin manifestación.

Apoderado ALLIANZ SEGUROS S.A.: Sin manifestación.

Apoderado COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA: Sin manifestación.

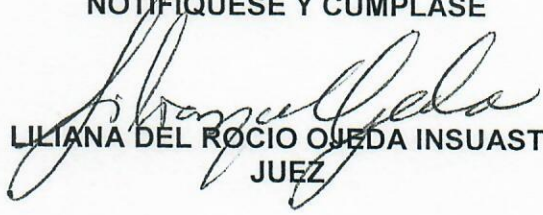
PROCURADORA JUDICIAL: Sin manifestación.

(Queda consignado en CD).


Acto seguido el Juzgado de conformidad con el numeral 10 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede a fijar como fecha para realizar la audiencia de pruebas el día 20 de septiembre de 2017 a las 3:00 de la tarde.

Se da por terminada la diligencia siendo las 03:44 p.m. y se firma por los intervinientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LILIANA DEL ROCIO OUEDA INSUASTY
JUEZ



JOSÉ FERNANDO MANCERA TABARES
Apoderado de la parte demandante



CARLOS PATIÑO MORENO
Apoderado POLICIA NACIONAL



CARLOS ARTURO ZULUAGA CAMACHO
Apoderado JUAN AUGUSTO RIO OSORIO y COLDETRANS



LUIS FERNANDO MEJIA SERNA
Apoderado ALLIANZAS SEGUROS S.A.



JORGE LUIS CADAVID ROMERO
Apoderado COOPERATIVA QUINDIANA
DE TRANSPORTADORES LTDA



BIBIANA MARIA LONDOÑO VALENCIA
PROCURADORA JUDICIAL



DIANA ROCÍO CÓRDOBA MUÑOZ
SECRETARIA AD-HOC

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL

Dosquebradas, 25 de marzo de 2025

Clase de proceso	Verbal
Trámite o cuantía	Menor
Radicado	04-2025-00171
Demandante	Compañía Colombiana de Transportes S.A.
Demandados	Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., Allianz Seguros SA y Juan Augusto Ríos Osorio
Auto	766
A notificar en Estado	47 de 26 de marzo de 2025

Una vez subsanada la presente demanda se observa que ya cumple con los requisitos de los artículos 82 del Código General del Proceso, por lo que se:

RESUELVE

1. Admitir la presente demanda verbal de menor cuantía promovida por Compañía Colombiana de Transportes S.A. contra Cooperativa Quindiana de Transportadores Ltda., Allianz Seguros SA y Juan Augusto Ríos Osorio.
2. Correr traslado a los demandados por el término de 20 días de conformidad con el artículo 369 del Código General del Proceso.
3. Notificar esta providencia de manera física a la parte demandada en la forma establecida en los artículos 291 y siguientes del CGP o, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022, exclusivamente mediante el envío de mensajes de datos, pero no de manera física con fundamento en esta última norma.
4. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 317 del Código General del Proceso, se requiere a la parte demandante para que, dentro de los 30 días siguientes, notifique del proceso a la parte pasiva.

5. A la presente demanda verbal imprímasele el trámite dispuesto en el artículo 368 y siguientes del Código General del Proceso.

6. Como el proceso virtual implica que no se entreguen documentos físicos al juzgado, la custodia de las pruebas documentales corresponde a las partes hasta que el juez no determine otra cosa. El uso indebido de los mismos durante el curso del proceso, una vez finalizado este o la negativa a entregarlos al juzgado o a quien el juez determine, dará lugar a la aplicación de las sanciones consagradas en el C. G. del P., sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.

7. Reconocer personería al profesional del derecho Christian Andrés Guevara Chica para que represente a la parte demandante en este proceso.

Notifíquese y cúmplase.

Paulo César Ramírez Dávila

Juez

M

Firmado Por:

Paulo Cesar Ramirez Davila

Juez

Juzgado Municipal

Civil 004

Dosquebradas - Risaralda

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **14ab554b3e51a0d510ff85281ea1fe5253d285f9d655250674f6cf0bb27f1619**

Documento generado en 25/03/2025 11:08:16 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

SEÑORES
JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA.
j04cmunicipaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co
j04cmpaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

REFERENCIA:	PROCESO VERBAL DE MENOR CUANTÍA
RADICADO:	2025-00171
DEMANDANTE:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. - COLDETRANS S.A.
DEMANDADOS:	JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA ALLIANZ SEGUROS S.A.

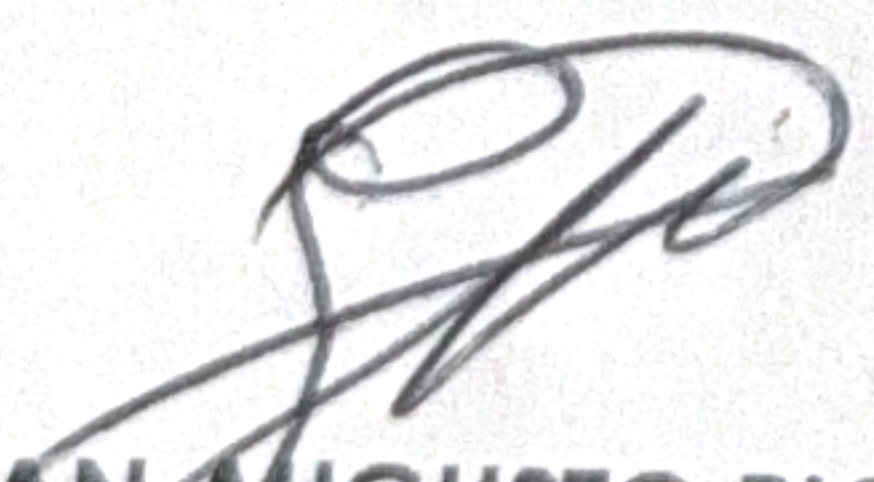
ASUNTO: PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE.

JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.225.828 expedida en Manizales, muy respetuosamente concurre a su despacho, con el fin de manifestar que confiero poder especial, amplio y suficiente al abogado **NICOLAS RÍOS GONZALEZ** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.088.325.095 expedida en Pereira y portador de la Tarjeta Profesional No. 289.040 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación funja como apoderada judicial, presente contestación a la demanda, llamamiento en garantía y continúe hasta la terminación del proceso referenciado, actualmente tramitado en su despacho.

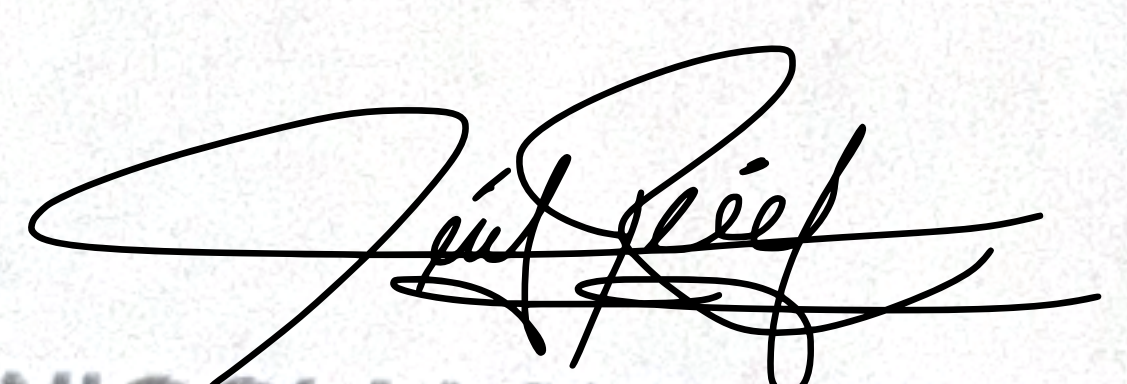
Mi apoderada judiciales queda ampliamente facultada para reclamar, conciliar, recibir, desistir, transigir, sustituir, reasumir, transigir, impugnar, renunciar a la acción, aportar pruebas necesarias y en general todas las facultades generales del Art. 77 del Código General del Proceso, hacer cuanto fuere necesario en el cumplimiento de este mandato, de tal manera que no pueda alegarse insuficiencia del mandato y de conformidad a la ley 2213 del 13 de junio de 2022.

Para efectos de notificaciones judiciales, mis apoderado registró ante el Consejo Superior de la Judicatura las siguientes direcciones de correo electrónico: nicolas.rios01@hotmail.com

Cordialmente,


JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO
C.C. No. 10.225.828

ACEPTA,


NICOLAS RÍOS GONZALEZ
C.C. 1088325095
T.P. 289.040 C. S. de la J.



PODER ESPECIAL RAD. 2025-00171

Desde JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO <jaugustoriososo@hotmail.com>

Fecha Sáb 19/04/2025 9:29 PM

Para Nicolas Ríos Gonzalez <nicolas.rios01@hotmail.com>

 1 archivo adjunto (12 MB)

PODER JUAN AUGUSTO RIOS .pdf;

SEÑORES

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA.

j04cmunicipaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co

j04cmpaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA:	PROCESO VERBAL DE MENOR CUANTÍA
RADICADO:	2025-00171
DEMANDANTE:	COMPANÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. – COLDETRANS S.A.
DEMANDADOS:	JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA ALLIANZ SEGUROS S.A.

ASUNTO: PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE.

JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.225.828 expedida en Manizales, muy respetuosamente concurro a su despacho, con el fin de manifestar que confiero poder especial, amplio y suficiente al abogado **NICOLAS RIOS GONZALEZ** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.088.325.095 expedida en Pereira y portador de la Tarjeta Profesional No. 289.040 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación funja como apoderada judicial, presente contestación a la demanda, llamamiento en garantía y continúe hasta la terminación del proceso referenciado, actualmente tramitado en su despacho.

Mi apoderada judiciales queda ampliamente facultada para reclamar, conciliar, recibir, desistir, transigir, sustituir, reasumir, transigir, impugnar, renunciar a la acción, aportar pruebas necesarias y en general todas las facultades generales del Art. 77 del Código General del Proceso, hacer cuanto fuere necesario en el cumplimiento de este mandato, de tal manera que no pueda alegarse insuficiencia del mandato y de conformidad a la ley 2213 del 13 de junio de 2022.

Para efectos de notificaciones judiciales, mi apoderado registró ante el Consejo Superior de la Judicatura las siguientes direcciones de correo electrónico: nicolas.rios01@hotmail.com

Cordialmente,

JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO
C.C. No. 10.225.828

ACEPTA,

NICOLAS RIOS GONZALEZ
C.C. 1088325095
T.P. 289.040 C. S. de la J.

 **REPUBLICA DE COLOMBIA**
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO



NOMBRES
NICOLAS

APellidos
RIOS GONZALEZ

PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
MARTHA LUCIA OLANO DE NOGUERA



UNIVERSIDAD
LIBRE PEREIRA

FECHA DE GRADO
24/02/2017

CONSEJO SECCIONAL
RISARALDA

CEDULA
1088325095

FECHA DE EXPEDICION
02/05/2017

TARJETA N°
289040




RV: CONTESTACIÓN DEMANDA / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA RAD. 2025-00171

Desde Nicolas Ríos Gonzalez <nicolas.rios01@hotmail.com>

Fecha Vie 25/04/2025 12:44

Para Juzgado 04 Civil Municipal - Risaralda - Dosquebradas <j04cmpaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC christianandresguevara <christianandresguevara@hotmail.es>; Erica Serna <gerencia@coldetrans.com>; asistenteadministrativo@cooquitrans.com <asistenteadministrativo@cooquitrans.com>; gerencia@cooquitrans.com <gerencia@cooquitrans.com>; marcelaballen@mbabogados.com <marcelaballen@mbabogados.com>; notificacionesjudiciales@allianz.co <notificacionesjudiciales@allianz.co>; maria.romero <maria.romero@externos.allianz.co>; jaugustorioso@hotmail.com <jaugustorioso@hotmail.com>

 12 archivos adjuntos (36 MB)

2. TARJPROF01.pdf; 4_4_110010315000202206588011SENTENCIA20230905094149.pdf; 51_110010315000202206588001SENTENCIA20230609114959.pdf; ACTA NO. 093.pdf; CONTESTACIÓN DE DEMANDA COLDETRANS .pdf; Correo_ Nicolas Ríos Gonzalez - Outlook.pdf; PODER JUAN AUGUSTO RIOS .pdf; LLAMAMIENTO EN GARANTIA.pdf; ADMISION COLDETRANS (1).pdf; POLIZA ALLIANZ.pdf; SA25744265AD13C.pdf; PODER ESPECIAL RAD. 2025-00171.eml;

No suele recibir correo electrónico de nicolas.rios01@hotmail.com. [Por qué es esto importante](#)

Buenas tardes, por medio del presente correo me permito remitir nuevamente contestación a la demanda, cordial saludo.

Nicolás Ríos González
Abogado
Especialista en Derecho Administrativo
Especialista en Derecho Comercial
Celular: 3185325420

De: Nicolas Ríos Gonzalez <nicolas.rios01@hotmail.com>

Enviado: sábado, 19 de abril de 2025 9:43 p. m.

Para: j04cmunicipaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co <j04cmunicipaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co>; j04cmpaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co <j04cmpaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: christianandresguevara@hotmail.es <christianandresguevara@hotmail.es>; Erica Serna <gerencia@coldetrans.com>; asistenteadministrativo@cooquitrans.com <asistenteadministrativo@cooquitrans.com>; gerencia@cooquitrans.com <gerencia@cooquitrans.com>; marcelaballen@mbabogados.com <marcelaballen@mbabogados.com>; notificacionesjudiciales@allianz.co <notificacionesjudiciales@allianz.co>; maria.romero@externos.allianz.co <maria.romero@externos.allianz.co>; jaugustorioso@hotmail.com <jaugustorioso@hotmail.com>

Asunto: CONTESTACIÓN DEMANDA / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA RAD. 2025-00171

SEÑORES

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS - RISARALDA.

j04cmunicipaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co

j04cmpaldosq@cendoj.ramajudicial.gov.co**E. S. D.**

REFERENCIA:	PROCESO VERBAL DE MENOR CUANTÍA
RADICADO:	2025-00171
DEMANDANTE:	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TRANSPORTE S.A. – COLDETRANS S.A.
DEMANDADOS:	JUAN AUGUSTO RÍOS OSORIO COOPERATIVA QUINDIANA DE TRANSPORTADORES LTDA ALLIANZ SEGUROS S.A.

ASUNTO: CONTESTACIÓN DEMANDA / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

NICOLAS RIOS GONZALEZ, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No.1.088.325.095 expedida en Pereira, portador de la tarjeta profesional de Abogado No. 289.040 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado del señor **JUAN AUGUSTO RIOS OSORIO**, identificado con la C.C. 10.225.828 expedida en Manizales, me dirijo a su despacho de manera respetuosa con el fin de presentar contestación a la demanda y formular llamamiento en garantía a ALLIANZ SEGUROS S.A. Para tal efecto adjunto la contestación a la demanda con sus anexos, el llamamiento en garantía junto con sus anexos y el poder debidamente otorgado.

Se remite copia de esta comunicación a los demás sujetos procesales.

Nicolás Ríos González

C.C. 1088325095

T.P. 289.040 del C.S. de la J

Celular: 3185325420